

Integración Energética en Latinoamérica y conflictos Socioambientales

Realizado por: Xavier León y Omar Bonilla

**En colaboración con: Miguel Ruiz, Gabriela
Gamboa, Lama Al Ibrahim, y Alejandro Suárez.**

Versión Final

Quito, julio del 2008

INDICE:

Introducción.....Pag 3

1. Mesoamérica y cuenca del caribe.....Pag 7

1.1 Antecedentes de la integración energética mesoamericana.....Pag 7

1.2 Proyectos y conflictos socioambientales.....Pag 8

2. Arco Andino.....Pag 10

2.1 Antecedentes de la integración energética en el Arco Andino.....Pag 10

2.2 Proyectos y conflictos socioambientales.....Pag 11

3. MERCOSUR.....Pag 21

3.1 Antecedentes de la integración energética en el MERCOSUR.....Pag 22

3.2 Proyectos y conflictos socioambientales.....Pag 22

Conclusiones y Recomendaciones.....Pag 31

Bibliografía.....Pag 41

Anexos.....Pag 43

Introducción

El presente reporte recoge los principales resultados de una investigación sobre la relación entre los procesos de integración energética en Latinoamérica y los conflictos socioambientales vinculados a ella. El informe está dividido en dos grandes apartados. En el primero se presentan los procesos regionales de integración y los conflictos asociados. Para tal efecto, se identificaron tres grandes regiones en donde los procesos de integración tienen lugar: Mesoamérica y el Caribe; el Arco Andino y el Cono Sur. El primero incluye a la región del Sureste de México, los países centroamericanos y los países de la cuenca del Caribe; el Arco Andino comprende a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Finalmente, bajo el rubro de Cono Sur hemos incluido al resto de países sudamericanos. Esta regionalización responde, más que a criterios políticos, a consideraciones de la geopolítica de integración energética, como se verá más adelante en el documento.

Es importante recalcar que, además de la división regional, al interior de cada una de las áreas investigadas, encontramos tres tipos de integración: la hidrocarburífera, que abarca la promoción de refinerías, petroquímicas y, sobre todo, el despliegue de redes de oleoductos y gasoductos; la integración eléctrica, que ha supuesto tanto la edificación de represas para la producción de energía así como el tendido de redes de transmisión; por último, la promoción de plantaciones de caña y maíz para la producción de agrocombustibles para la exportación.

En el segundo apartado se presentan las conclusiones generales y se hacen algunas recomendaciones de políticas públicas en la materia. Antes de pasar a exponer los casos regionales de integración, nos parece importante hacer algunas reflexiones generales en torno al contexto sobre el cual se despliegan los procesos estudiados.

En la actualidad, la gestión de los recursos energéticos constituye un elemento determinante de la geopolítica continental, incluyendo la presencia preponderante de los Estados Unidos y Canadá. La creciente dependencia de la economía norteamericana de las fuentes energéticas externas supone una de presión creciente sobre las reservas y yacimientos de petróleo y gas de la región. Latinoamérica posee el 9,7% del total de reservas petroleras en el mundo (de ellas el 40% son reservas no explotadas). En el caso del gas, nuevos hallazgos de yacimientos en Brasil, Venezuela y Bolivia incrementan substancialmente las ya significativas reservas gasíferas del subcontinente. Esta presión creciente ha llevado a un conjunto de países latinoamericanos a plantearse la necesidad de emprender procesos de

integración energética no subordinados a las prioridades de los Estados Unidos. Sin embargo, tales procesos no están orientados necesariamente a la resolución de las carencias energéticas de las grandes masas de población excluidas, sino en muchas ocasiones a la satisfacción de la demanda de espacios urbano-industriales de tipo enclave, como el caso de los cinturones de empresas maquiladoras o mineras.

Generalmente el desarrollo de los proyectos de integración energética no ha sido precedido por un amplio debate sobre los posibles impactos socioambientales que estos podrían producir, tales como el desplazamiento de comunidades, la pérdida de tierras para cultivos, el impacto sobre el acceso de las comunidades al agua, la violencia e intimidación por parte del Estado y de las empresas ejecutoras de los proyectos, etc. El hecho de la poca apertura pública para la discusión sobre los impactos potenciales, se ha traducido en una alta conflictividad social y oposición de las comunidades que viven alrededor de los megaproyectos. Existe una gran preocupación en varios sectores de la sociedad civil - comunidades, movimientos sociales y grupos ecologistas - sobre todo por los graves impactos que la implementación de los megaproyectos comportan en las distintas regiones y ecosistemas en los que estos se asientan. Por este motivo, el presente informe reportará los casos de conflictividad socioambiental no sólo actuales, sino aquéllos potenciales que podrían estallar de implementarse los grandes proyectos de integración propuestos por los estados, las empresas o los organismos multilaterales. Antes de pasar a describir cuáles son los principales conflictos en cada una de las regiones, es importante aclarar qué entendemos por conflictividad socioambiental.

¿Cómo entendemos los conflictos socioambientales?

En la literatura académica existen un sinnúmero de definiciones y formas de pensar los conflictos socioambientales. Fontaine, por ejemplo, identifica tres grandes perspectivas para visualizarlos: “Un primer enfoque retoma de la economía ecológica el concepto de conflictos distributivos [...] En este sentido, destaca el pragmatismo de los actores sociales y el potencial de los conflictos ambientales locales para convertirse en vectores de transformación social”.¹ Otro enfoque, influenciado por los estudios del movimiento verde alemán, se preocupa por las experiencias de conflictos y colaboración entre los movimientos ecologistas y del Estado; finalmente, una tercera perspectiva se centra en las dimensiones transnacionales de conflictos socioambientales, entendidos como una expresión de la globalización de las relaciones

¹ Fontaine, Guillaume, “Verde y negro: ecologismo y conflictos por petroleras en el Ecuador”, en Fontaine, Guillaume, Greert Van Vliet y Richard Pasqui (coord.), *Políticas ambientales y gobernabilidad en América Latina*, FLACSO-IDDRI-CIRAD, Quito, 2007, p. 231.

sociales. Por la naturaleza de nuestro estudio, esta última perspectiva es la que más se ajusta al objeto del presente reporte.

Otra forma de abordar los conflictos tiene que ver con la correlación de fuerzas entre los sujetos en juego. En esta perspectiva los conflictos pueden ser de tipo simétrico o asimétrico: “Aquellos simétricos tienen por característica la existencia de actores en conflicto que cuentan con recursos de poder similares o balanceados, mientras que los conflictos asimétricos manifiestan abierta disparidad (sic) entre los recursos de poder que poseen”.²

A partir de los casos estudiados pudimos constatar que en la gran mayoría de las situaciones nos encontramos frente a conflictos de tipo asimétrico, pues generalmente los actores que han entrado en conflicto son, por un lado, el Estado o grandes empresas del ramo energético y, por otro, comunidades aisladas con pocos recursos de información, organización y gestión del conflicto. En este sentido, la mayoría de casos se ajustan a la siguiente descripción de Víctor López:

Por lo general, las comunidades afectadas por conflictos socioambientales se encuentran en una inicial relación de desequilibrio de poder con su contraparte ocupando así la posición débil [...] Por lo general, esta situación se hace evidente por cuanto el grupo de mayor poder es una empresa poderosa que se ha organizado anticipadamente para iniciar sus actividades habiendo en algunos casos, recolectando información obteniendo el aval del Estado para iniciar sus operaciones, estableciendo redes de contactos con las autoridades locales, regionales y/o nacionales, realizando estudios socioeconómicos del área afectada, ofreciendo un conjunto de beneficios a la comunidad, o adquiriendo ciertos recursos locales como tierras, mano de obra, etc.³

Independientemente de su carácter simétrico o asimétrico, nacional o transnacional es importante señalar que los conflictos socioambientales son *procesos interactivos entre actores sociales movilizados*.⁴ Y, como tales, no son ajenos a la situación de tales actores en el conjunto de la estructura social; pero también a sus formas de habitar el mundo, a sus percepciones y prácticas culturales, a su historia. Es por ello, que no podemos entender a los conflictos simplemente como la contraposición de *intereses* diversos o contradictorios sino, fundamentalmente, como conflictos que expresan la incompatibilidad de necesidades entre los actores en disputa. En síntesis, como señala Scelleberg, los conflictos socioambientales “están en las base material de las estructuras de la sociedad [...] expresando intereses diferenciados

² López, Víctor, *Conflictos socioambientales. Desafíos y propuestas para la gestión en América Latina*, Abya Yala, Quito, 2000, p. 107.

³ López, Víctor, *op cit.*, p. 108.

⁴ Torres, Víctor Hugo, *Aprendiendo de los conflictos. Experiencias metodológicas de manejo de conflictos socioambientales en Ecuador*, PLASA, Futuro Latinoamericano, Quito, 2005, p. 13

sobre los recursos naturales que están orgánicamente articulados a los distintos estratos sociales, es decir, son conflictos entre diferentes segmentos de la sociedad que ponen en evidencia relaciones polarizadas entre las partes”.⁵

⁵ Scellenberg citado en Torres, Víctor Hugo, pp. 11-12.

1. MESOAMÉRICA Y CUENCA DEL CARIBE

1.1 Antecedentes de la integración energética mesoamericana.

Los proyectos de integración energética en la región se originan en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), formado en 1991 en el marco de la XI Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en Tegucigalpa, Honduras. Los estados que forman parte de este proyecto son: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. República Dominicana, se encuentra en calidad de estado asociado y México, España y China son estados observadores.⁶

Los proyectos planteados por el SICA se consolidan en el contexto de la firma de tratados y acuerdos de libre comercio con EE.UU en la región, acompañados de iniciativas de integración regionales que confluyeron al interior del llamado Plan Puebla Panamá.⁷

SIEPAC. Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central.

Es una iniciativa de integración energética que se encuadrada al interior del Plan Puebla Panamá. El proyecto está a cargo de un conglomerado de empresas y organismos, conformado por Comisión Regional de Interconexiones Eléctricas (CRIE), el Ente Operador Regional (OPR), Empresa Propietaria de la Red (EPR), la multinacional ENDESA, y los Gobiernos de México, Centroamérica y España. El objetivo es integrar los sistemas eléctricos y definir marcos regulatorios para los mercados de Panamá, Costa Rica, Honduras, el Salvador y Guatemala para facilitar las transacciones eléctricas.

⁶ <http://www.sica.int/miembros/miembros.aspx?IdEnt=401> (descargado 20/ 05/08)

⁷ El Plan Puebla Panamá (PPP) es un proyecto que a la vez que promueve el desarrollo de los estados del sureste mexicano, tiende a la “integración del sureste de México con Centro América por medio de una serie de corredores logísticos, de infraestructuras de transporte (carreteras, puertos marinos, aeropuertos), comunicaciones (redes de fibra óptica) y energía (electricidad y gasoductos)” Barreda, Marín Andrés, “Los objetivos del Plan Puebla Panamá”, en Álvarez Alejandro et al, Economía Política del Plan Puebla Panamá, Editorial Itaca, Mexico DF, 2002.

1.2 Proyectos y conflictos socioambientales

a) Hidroeléctricas

La construcción de 1.830 km de tendido eléctrico del Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC) implica deforestación que afecta la armonía de comunidades y ecosistemas. Por ejemplo, la prolongación del SIEPAC hacia Colombia atravesaría por el Darien, que abarca 1,2 millones de hectáreas de áreas naturales vírgenes. Pero, la mayor preocupación respecto a impactos sociales y ambientales se centra en los proyectos hidroeléctricos. Hasta ahora la implantación de estos megaproyectos ha acarreado para Centroamérica y el mundo, grandes desplazamientos, destrucción y apropiación de tierra, apropiación de recursos naturales, efectos nocivos para la salud por enfermedades, contaminación e insalubridad, destrucción de vestigios arqueológicos, y de innumerables efectos ambientales y de alto impacto. En el Inventario de Infraestructura Mesoamericana, Conservation Strategy Fund, se menciona la posible construcción de 406 represas, las que producirían alrededor de 16,000 megavatios de energía⁸. La sociedad civil y los movimientos sociales se están manifestando contra la implantación de estos proyectos. A continuación se citan algunos de los mismos:

Por ejemplo, en la cuenca del río Usumacinta en Chiapas -frontera con Guatemala- se planea la construcción de una serie de hidroeléctricas, que de realizarse tendrían un alto impacto en el medio ambiente, comunidades indígenas y restos arqueológicos (en Guatemala). En Chiapas, la construcción de hidroeléctricas implican a varios ríos y cuencas del río Grijalva y Usumacinta. El sistema Usumacinta-Tulija y los proyectos Quetzalli, Huixtan I, Huixtan II, Jatza y Nance aportarían una potencia total de 9,520 MW. La irrigación del río Usumacinta resulta imprescindible para el ecosistema de la selva Lacandona. La construcción de una mega-presa implicaría inundar 700 km² de selva donde se perderían importantes vestigios arqueológicos mayas y se afectaría a más de 23 comunidades que habitan a las orillas del río mencionado. En caso de edificarse una cortina de concreto, el Usumacinta se convertiría en un río muerto, lo que significaría un gran daño en la biodiversidad y un claro desequilibrio ecológico. Otro ejemplo es el de La Parota, ubicada en el Estado de Guerrero, la represa proyectada inundaría mas de 17 mil hectáreas de tierra y desplazaría a 25.000 campesinos directamente y a otros 17.000 mil río abajo. El proyecto de la represa ha

⁸ Miranda, Miriam ; “La represa del Patuca y la ofensiva en contra de los ríos mesoamericanos”, 21-02-08; en: <http://www.ecoportal.com.ar/layout/set/print/content/view/full/76299> (descargado 25/ 05/08)

convocado a una resistencia organizada por parte de Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota con el apoyo de grupos ambientalistas y de derechos humano y miembros del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas. Se han interpuesto varios amparos y se han realizado movilizaciones y resistencia⁹.

Por otro lado, en Honduras el proyecto de la Hidroeléctrica Patuca III tendrá un impacto desastroso para los pueblos Tawahka y Miskito y para la la selva tropical y áreas protegidas de la región. El proyecto tendría una capacidad de generar 100 megavatios por hora. La Taiwan Power Company es la más interesada en construir mediante concesión la represa que tendrá un costo de 250 millones de dólares. Por otro lado, el movimiento social hondureño logró dejar cancelar el mega proyecto “El Tigre”, que se construiría entre Honduras y El Salvador, gracias a la oposición de sus pobladores, respaldados por grupos ambientales. Con una cortina de 100m de altura, esta represa implicaba el desalojo de 20,000 personas, dejando a comunidades, zonas de cultivo y una zona natural de valor incalculables cubiertas bajo el agua.¹⁰

En Costa Rica, el Proyecto Boruca, ubicado en el río Terraba, ofrece ser el proyecto hidroeléctrico más grande de Mesoamérica. La represa de 250 metros de altura dejaría 25.000 hectáreas de tierra bajo el agua, entre ellas toda la Reserva Rey Curre y parte de los territorios de Terraba y Boruca; las reservas de Ujarras, Salitre y Cabagra también serían afectadas por infraestructuras relacionadas con la represa y algunas comunidades indígenas y campesinas tendrían que ser reubicadas. Por otro lado, proyectos hidroeléctricos, promovidos por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en Telire, Talamanca, Nakeabre, Bugu, Gran Boruca, Palmar, Kamankrewa, Boyley, Ayil, Pacuare, Sueo, Tanri, Coen Cabecar, Lari, están ubicados en comunidades indígenas que serían afectadas por estas represas.¹¹

⁹ Díaz, Emiliano; “La privatización de la energía eléctrica, amenaza para los ríos, Denuncia Mapder”; 16-04-2007; <http://www.lajornadajalisco.com.mx/2007/04/16/index.php?section=sociedad&article=007n1soc> (descargado 25/ 05/08)

¹⁰ COPHIN, “En Intibuca, Honduras, el Pueblo se levanta contra la represa el tigre”; 16-05-2006; <http://portal.rds.org.hn/listas/etnias/msg00289.html> (descargado 24/ 05/08)

¹¹ Hernandez Benjamin, ¡No al proyecto hidroeléctrico en Boruca!, en <http://www.latinoamerica-online.info/soc03/natura17.03.html> (descargado 23/ 05/08)

2. ARCO ANDINO

2.1 Antecedentes de la integración energética en el Arco Andino

Uno de los países latinoamericanos que actualmente posee un discurso y una estrategia que apuesta explícitamente por la integración energética es Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez ha diseñado una estrategia amplia conocida con el nombre de **Petroamérica**, que a su vez se enmarca en la propuesta macro de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), cuyo objetivo principal es la integración (no sólo energética, sino política y social) de todos los países latinoamericanos, como una respuesta al proyecto estadounidense de integración hemisférica del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En este contexto, Petroamérica es “concebida como un habilitador geopolítico orientado hacia el establecimiento de mecanismos de cooperación e integración, utilizando los recursos energéticos de las regiones del Caribe, Centroamérica y Suramérica, como base para el mejoramiento socioeconómico de los pueblos del continente.”¹² Dicha iniciativa abarca tres proyectos subregionales: Petrosur, Petrocaribe y Petroandina.

- **Petrosur**, agrupa a Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay;
- **Petrocaribe**, a 14 países de la región caribeña (vid *supra*);
- y **Petroandina**, propuesta para los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela).

Las tres iniciativas de Petroamérica promueven la cooperación y acuerdos bilaterales entre empresas y/o Estados, y el establecimiento de sociedades y/o acuerdos de cooperación específicos en materias como:

- Suministro de crudo y productos
- Intercambio de bienes, servicios, desarrollo de infraestructura, financiamiento
- Diseño, construcción y operación conjunta de refinerías, facilidades de almacenamiento y terminales
- Comercialización conjunta de crudos, productos, glp, asfaltos y lubricantes
- Transporte y logística
- Exploración y explotación conjunta de petróleo y gas
- Procesamiento y comercialización de gas
- Petroquímica

¹² PDVSA, “Petroamérica”, en <http://www.pdvsa.com>

- Tecnología / adiestramiento
- Combustibles ecológicos
- Políticas públicas¹³

2.2 Proyectos y conflictos socioambientales

a) Hidrocarburos.

Petroandina tiene su origen en el XVI Consejo Presidencial Andino realizado el 18 de julio de 2005 en Lima, como plataforma común de organismos estatales petroleros y energéticos de los 5 países de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), “para impulsar la interconexión eléctrica y gasífera, la provisión mutua de recursos energéticos y la inversión conjunta en proyectos”.¹⁴ Hasta el momento los proyectos de Petroandina no han implicado el desarrollo de oleoductos regionales, sino inversión de PDVSA en refinerías de otros de los países del acuerdo y en venta de petróleo venezolano a precios preferenciales. Sin embargo en el marco de Petroandina, actualmente se están desarrollando algunos proyectos de integración energética en torno a los combustibles fósiles. Este es el caso de la Refinería del Pacífico, proyecto que supone una inversión conjunta de PetroEcuador y PDVSA por un monto total de 6.600 millones de dólares. La Refinería tendría una capacidad de refinación de 300.000 barriles de petróleo diarios¹⁵. Está previsto que la Refinería se construya en la Provincia ecuatoriana de Manabí, en el sector de El Aromo, territorio tradicionalmente ocupado por comunidades campesinas organizadas en torno a tierras comunitarias.

Los campesinos de las comunidades de San Mateo, Los Sauces, El Aromo, La Travesía, Sta. Marianita, Pacoche, Ligüiqui, San Lorenzo, Río Caña y Las Piñas, han iniciado una serie de movilizaciones mostrando su desacuerdo con la construcción de la Refinería debido a los altos impactos ambientales sobre sus territorios, en especial sobre el bosque seco y humedo de Pacoche. Al tiempo muestran su desacuerdo por el modo en que se decidió la construcción de la Refinería, sin consulta previa, ni estudios preliminares de impacto ambiental.

¹³ Idem.

¹⁴ PDVSA, “Petroamérica”, en <http://www.pdvs.com> (descargado 20/ 05/08)

¹⁵ Diario El Universo, sobre fuentes de PetroEcuador, citado en <http://elecuadordehoy.org/2008/06/02/la-refineria-de-el-aromo/> (descargado 20/06/2008)

b) Gasoductos

El megaproyecto del Gasoducto del Sur.

Este proyecto fue dado a conocer en abril de 2006 en Río de Janeiro por los presidentes Hugo Chávez de Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Néstor Kirchner, de Argentina. El costo estimado en ese momento se calculó en alrededor de 25,000 millones de dólares. El objetivo sería tender aproximadamente 9,000 kilómetros de tuberías para abastecer de gas venezolano a los países mencionados del Mercosur, a los que más tarde se agregarían Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador. El proyecto se planteó como una posibilidad para llevar diariamente 150 millones de metros cúbicos de gas desde Venezuela a los principales centros urbano-industriales de los países mencionados, lo que implica casi la mitad del actual consumo de gas en la región. El tiempo de ejecución estimado se calculó entre 5 a 7 años: “Los países involucrados deberían hacer encargo del tendido de la red interna necesaria para la distribución y efectivo consumo del gas provisto, en particular de Brasil”.¹⁶ El proyecto del gasoducto quedó inscrito desde marzo de 2007 en otra iniciativa venezolana denominada Organización de Países Productores y Exportadores de Gas del Sur (OPPEGASUR), misma que fue firmada por los presidentes de Venezuela, Bolivia y Argentina en la fecha citada. Como hasta la fecha el único ducto de transporte de hidrocarburos en operación que involucra a dos o más países en el área Andina es el Gasoducto Transoceánico (sobre el cual no se reportan conflictos socioambientales), en este apartado nos concentraremos en los conflictos socioambientales *potenciales* que podría provocar el Gasoducto del Sur, mismo que actualmente se encuentra en *stand by*.

Entre las diversas organizaciones sociales de los países que involucraría la construcción del mencionado ducto que han denunciado los potenciales impactos negativos del mismo se encuentran Amigos de la Gran Sabana (Amigransa) y la Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch. Según reportes de la prensa local venezolana, miembros de esas organizaciones han señalado que el gasoducto implicaría “*gran deforestación y remoción de tierra para hacer posible su paso, así como caminos nuevos en sitios antes vírgenes para asegurar el permanente mantenimiento y vigilancia de la obra*”.¹⁷ Los ecologistas también han señalado que las tuberías de hidrocarburos son altamente proclives al desgaste, la

¹⁶ Guzmán, Oscar, “El factor energético en la integración de la Unión de Naciones Suramericanas”, en en Schutt, Kurt Meter y Flavio Carucci (Coord.), El Factor energético y las perspectivas de integración en América del Sur, ILDIS, 2008, p. 73

¹⁷ Ivonne Rincón, “El gasoducto destruirá la Amazonía y la Guayana venezolana”, El Correo del Caroní, 17/04/07. Consulta en línea: <http://www.correodelcaroni.com/content/view/63454/139/> (descargado 20/ 05/08)

corrosión, y por lo tanto propensas a filtraciones, o rupturas, lo cual es más alarmante en el caso de los ambientes húmedos tropicales, como la Amazonía, que sería atravesada por el gasoducto, tanto en Venezuela (Gran Sabana) como en el Brasil. Por otro lado, María Eugenia Bustamante y Alicia García, miembros del Comité Ejecutivo de Amigransa, advirtieron que el gasoducto sería un atentado contra una de las principales áreas naturales protegidas de Venezuela: “*El Parque Nacional Canaima es Patrimonio Natural de la Humanidad y tiene un plan de manejo y reglamento de uso para el sector oriental, que hicimos aproximadamente en el año 90 ó 91, que da los lineamientos de lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro del parque, y por encima de ese reglamento están todas las demás leyes. Entonces desafectar cualquier tipo de área para tomar préstamos, abrir picas y afectar recursos va en contra del manejo del parque*”.¹⁸ Los ecologistas también han llamado la atención sobre la ausencia de un proceso de consultas con las comunidades afectadas, así como de debates públicos, y la carencia de estudios de impacto ambiental, social y cultural, tal y como lo establecen las leyes venezolanas e internacionales como el convenio 169 de la OIT.

Roberto Smeraldi, coordinador de Amigos de la Tierra Brasil-sección Amazónica, consideró que “nosotros estamos particularmente preocupados sobre el flujo de las migraciones humanas hacia las áreas que el gasoducto atravesará [...] el proceso de colonización traerá problemas ecológicos hacia nuevas fronteras. Todo esto implica deforestación y ocupación de esta tierra –una situación explosiva”.¹⁹ Para Smeraldi, la construcción del Gasoducto también traería disputas agrarias, especialmente en el norte y centro brasileños.²⁰ Por su parte, Atossa Soltani, directora ejecutiva de Amazon Watch cree que el proyecto promete grandes daños “para los próximos 20 o 30 años, tal como las nuevas ramas del gasoducto que pueden alimentar industrias intensivas en energía hacia su expansión en áreas relativamente prístinas y ecológicamente frágiles de la selva amazónica”.²¹

En este mismo sentido, Adilson Vieira, coordinador del Grupo de Trabajo Amazónico (red de 600 organizaciones), consideró que el gasoducto tendría “*efectos sociales violentos*” en muchas áreas indígenas en Brasil y Venezuela, pues atravesaría territorios de más de 22

¹⁸ Ivonne Rincón, “Ambientalistas exigen suspensión del proyecto de gasoducto”, El Correo del Caroní, 09/03/06. Consulta en línea: <http://www.correodelcaroni.com/content/view/24906/139/> (descargado 21/ 05/08)

¹⁹ Kelly Hearn, “World largest pipeline proposed to run through Amazon”, en National Geographic News, 04/01/07. Consulta en línea: <http://news.nationalgeographic.com/news/2007/01/070104-gas-pipeline.html> (descargado 23/ 05/08)

²⁰ Mario Osava “Lluvia de críticas a supergasoducto en Brasil”, Tierramérica, Río de Janeiro, 29/05/07. Consulta en línea: <http://www.tierramerica.info/sendnota.php?lang=esp&idnews=315> (descargado 25/ 05/08)

²¹ Kelly Hern, op cit.

pueblos originarios y un sinnúmero de áreas protegidas.²² Finalmente, es importante recordar que en marzo de 2006 diversas organizaciones ambientalistas recolectaron más de mil firmas de representantes de la sociedad civil de más de 23 países, donde expresaron su rotundo rechazo al proyecto de construcción del gasoducto.²³ El documento concluye con la siguiente afirmación: “*Esta mal llamada integración, no traería ni unidad ni bienestar a los pueblos del Sur ya que está fundamentada en la sobre-explotación de los recursos naturales y en la destrucción del patrimonio biodiverso que existe en esta excepcional región. Sin lugar a dudas, ese proyecto acrecentará la deuda ecológica y social y por ende, la pobreza.*”²⁴

Gaseoducto Transoceánico. Este es el único caso de interconexión gasífera en el Arco Andino que ha trascendido el papel para convertirse en realidad. El Gasoducto Transoceánico, puesto en operación en octubre de 2007 tiene 224 kilómetros de tubería de 26 pulgadas, de los cuales 135 kilómetros se encuentran del lado venezolano y 88 kilómetros del lado colombiano. El Gasoducto Transoceánico lleva el gas desde Puerto Ballena, en Colombia, hasta Maracaibo, en Venezuela; incluye 10 estaciones y un tramo subacuático de 22 kilómetros. La inversión realizada alcanzó el monto de 467 millones de dólares, más otros 56 millones para el desarrollo de obras sociales con las comunidades asentadas en la franja aledaña al mismo.²⁵ Es importante señalar que durante el 2006, Colombia, Venezuela y Panamá firmaron un Memorando de Entendimiento para ampliar el suministro de gas colombiano a Panamá. El proyecto se llevará a cabo en dos fases: en la primera, a partir del 2009, el gas se transportaría por vía marítima y en la segunda, a partir del 2014, por medio de un gasoducto.²⁶

El yacimiento de Camisea en el Perú.

Perú cuenta con yacimientos de gas natural en la zona de Camisea, en la selva amazónica del meridional departamento de Cusco, donde se levanta un proyecto que pretende vender 2,7 millones ton/año de gas natural a Tractebel Electricity & Gas International a partir de fines de 2007. Actualmente existen negociaciones entre Perú y el MERCOSUR para el

²² Mario Osava “Lluvia de críticas a supergasoducto en Brasil”, Tierramérica, Río de Janeiro, 29/05/07. Consulta en línea: <http://www.tierramerica.info/sendnota.php?lang=esp&idnews=315> (descargado 24/ 05/08)

²³ Humberto Márquez, “El supergasoducto es caro y polémico”, IPS, 22/02/06. Consulta en línea: <http://www.tierramerica.net/2006/0225/noticias3.shtml> (descargado 24/ 05/08)

²⁴ AAVV, “Carta abierta a los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela”, 03/06. Consulta en línea: <http://amigransa.blogia.com> (descargado 25/ 05/08)

²⁵ PDVSA, “Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos, Avances de la Nueva PDVSA”, 14/10/07. Consulta en línea: <http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/publicacion/2287/130.PDF> (descargado 28/ 05/08)

²⁶ Guzmán, Oscar, “El factor energético en la integración de la Unión de Naciones Suramericanas”, en Schutt, Kurt Meter y Flavio Carucci (Coord.), El Factor energético y las perspectivas de integración en América del Sur, ILDIS, 2008, p. 74.

aprovechamiento de parte de las reservas de Camisea en el abastecimiento de energía. Una porción menor de las reservas se destinará al consumo interno y otra a la exportación al norte chileno, en caso de concretarse el gasoducto correspondiente. La planta será alimentada por un gasoducto que cruza la cordillera de los Andes a gran altura y desciende sobre la costa.²⁷

Un Informe del 2006, de la Defensoría del Pueblo de Perú, señala que las compañías exploradoras y distribuidoras del gas, en complicidad con el Estado peruano, son responsables de una serie de amenazas sobre pueblos indígenas no contactados; según el documento, graves enfermedades infecciosas como diarrea, sífilis, influenza y otras que afectan el sistema respiratorio llegaron a las comunidades nativas de Camisea. Después de hacer un seguimiento de cinco años de los trabajos en Camisea, entre el 2000 y 2005, la Defensoría del Pueblo señala que los pueblos indígenas de la zona resisten graves amenazas relacionadas con la propagación de enfermedades.

Las comunidades nativas en aislamiento y las que están en situación de contacto inicial, afectadas o expuestas a la presencia de foráneos, son las Nahua, Matsiguenga, Nanti y Kugapakori. Estas comunidades “son particularmente vulnerables ante las infecciones respiratorias y gastrointestinales”, además “su identidad cultural se encuentra sometida a cambios que menoscaban su autoestima”; según el informe: “La Defensoría del Pueblo entre 2001 y 2003 ha recogido evidencias de la inejecución (incumplimiento) de las obligaciones contractuales por parte de las empresas, lo cual se explica en parte por la debilidad institucional del Estado”.²⁸ La Defensoría también destaca las consecuencias de las cuatro fugas de gas líquido en un periodo muy corto, y que fue materia de investigación del informe de E-Tech International, y subraya el impacto de esos derrames sobre la vida de los indígenas. La firma PlusPetrol ha fijado en 10,2 millones de dólares el monto compensatorio para las comunidades afectadas por la explotación del gas por un periodo de 42 años. Esto equivale a 244.000 dólares por año, o 668 dólares por día. Para la Defensoría, se trata de un cálculo discutible.

²⁷ Del Solar, Carlos, “Perú LNG” (presentación Power Point), 06/09/06. Consulta en línea: <http://www.olade.org.ec/fier/Documents/PDF-18.pdf> (descargado 29/ 05/08)

²⁸ Paéz, Angel, “Derechos indígenas violados por gasoducto en Camisea”, IPS, 01/03/06. En: <http://www.olca.cl/oca/peru/camisea02.htm> (descargado 22/ 05/08)

c) Agrocombustibles

Venezuela.

En el país existen cultivos de caña de azúcar y palma africana que se pueden orientar hacia combustibles. En el caso de la caña de azúcar ese destino es limitado, en tanto el país enfrenta déficit de azúcar para el consumo doméstico. En 2004, el presidente Chávez anunció un programa de promoción para utilizar la caña de azúcar para producir bioetanol.²⁹ La empresa estatal venezolana de petróleo (PDVSA) planea construir 15 usinas de procesamiento a partir de caña de azúcar, y además tiene un convenio con la brasileña Petrobrás para importar bioetanol (Coviello, 2006). PDVSA se encuentra en proceso de crear una empresa mixta que se dedique a la producción de etanol. Como parte de los preparativos, PDVSA aportó financiamiento para realizar estudios de factibilidad en futuras áreas de cultivo de caña y podrían plantarse hasta 276 mil hectáreas de este producto. En la actualidad el etanol se importa de Brasil para mezclarlo con la gasolina en proporciones de hasta un 8%.

Colombia.

Es uno de los países de mayor producción y productividad en América Latina en dos materias primas de enorme peso en la producción futura de biocombustibles, como son el azúcar y el aceite de palma. El país tiene excedentes exportables de estos dos productos y la producción de biocombustibles, tanto para el mercado interno como para el mercado internacional.³⁰

Datos otorgados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación Colombiana de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña), ambas informan que el cultivo de caña de azúcar se incrementó entre el período comprendido de 1991-2005, ambas fuentes señalan que el incremento anual del cultivo se fijó entre 2,8% y 3,8%.

El marco legal establecido en Colombia para la generación de energía, estipula según la ley 693/2001 que la gasolina deberá tener un 10% de etanol en 2009 y alcanzará gradualmente una proporción del 25% en los próximos 15 o 20 años. Para cumplir con este

²⁹ Coviello, M.F. Energías renovables en América Latina y el Caribe: dos años después de la Conferencia de Bonn. CEPAL y GTZ, Santiago de Chile. 2006.

³⁰ IICA, Atlas de la agroenergía y los biocombustibles en las Américas.

requerimiento señalado en la ley, se necesita incrementar la superficie sembrada con caña de azúcar en 150.000 ha, lo que se sumaría a las 200.000 ya existentes.³¹

La zona occidental del país, departamento de Nariño y Valle del Cauca, en el año 2005 concentró 32.416 ha – en producción y desarrollo- de plantaciones para agrocombustibles, que representan el 12% del área ocupada por estos cultivos en el país. Esta expansión de los cultivos de palma aceitera está asociada con la puesta en marcha del Plan Colombia.

Ingeomega de Medellín desarrollará proyectos de agrocombustibles en Guatemala, Honduras y El Salvador, para lo cual contará con 6.000 millones de dólares. Así lo anunció el ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias. El funcionario señaló que los recursos para la construcción de la plantas se entregaron a Corpoica, que será la entidad que asumirá como operadora los tres proyectos. La firma constructora superó un proceso de selección entre varias compañías. Cada planta tendrá la capacidad de producir 2.000 litros por día de biodiesel. La planta será operada por Ecodiesel Colombia, S.A. Se instalará en Barrancabermeja y tendrá capacidad de producir 100.000 toneladas anuales. Elaborará el combustible con base en aceite crudo de palma, a una generación de 2.000 barriles por día de producto.

Para Rosa Bermúdez investigadora en el área de conflictividad ambiental en Colombia, uno de los aspectos que cobra importancia es el complejo régimen de propiedad que se ha configurado en esta zona y que centra la discusión en la región. La FAO calcula que en Colombia quedan unos 49 millones de ha de bosque naturales. De ellos, 23 millones pertenecen a comunidades negras e indígenas y 10 millones al sistema de parques.

Por otro lado –señala- el impulso de monocultivo de palma de aceite por parte del gobierno nacional que gira alrededor de distintos factores, como el compromiso político adquirido con respecto al control territorial en función de los llamados cultivos ilícitos. La expansión del cultivo de palma aceitera en el Pacífico colombiano se ha dado en zonas donde han incursionado los grupos paramilitares a partir de mediados de la década de 1990.³²

³¹ Bravo, Elizabeth, Biocombustibles, cultivos energéticos y soberanía alimentaría en América Latina. Quito-Ecuador.

³² Bermúdez, Rosa Megaproyectos de infraestructura y agrocombustibles en el Pacífico Colombiano. En “Agrocombustibles: Llenando tanques, vaciando territorios” Censat Agua Viva y PCN, Bogotá, 2008.

En otros casos, se les pide a los campesinos que siembren palma o tienen que salir de sus tierras, el presidente Uribe está siempre promocionando la palma, y ha creado un programa de “empresarios exitosos por la paz”, que se basa en las plantaciones de palma como sustituto a la coca. Los afectados son sobre todo las comunidades negras e indígenas, cuyos derechos fueron reconocidas en la Constitución de 1991, y en ese marco se les entregó títulos colectivos. Sin embargo ellos no han podido gozar de sus territorios.³³

Ecuador.

La producción de agrocombustibles es mínima en relación a otros países de la región andina. En el 2005 la superficie sembrada de caña de azúcar fue de 135.000 ha, de las cuales, 75.000 estaban destinadas a las producción de azúcar, 50.000 a la producción de panela y aguardiente y 10.000 a la producción de etanol (100.000 litros/día). La producción de palma aceitera tiene lugar en 11 de las 22 provincias del Ecuador. Al momento se obtienen 350.000 toneladas de aceite de 270.000 hectáreas de palma, se consumen 200.000 toneladas de aceite y se exportan 150.000 toneladas de aceite excedente.³⁴

El pasado junio del 2006, en el Primer Simposio Ecuador-Brasil de biocombustibles, evento en el cual el Gobierno ecuatoriano inició formalmente el Programa Nacional de Biocombustibles con asistencia técnica de PETROBRAS. La primera actividad del Programa Nacional de Agrocombustible es la realización del proyecto piloto “Uso de Etanol Anhidro en la Formulación de Gasolina Extra”, iniciativa que se viene coordinando a través de un “Grupo Consultivo de Biocombustibles”.

El Proyecto Piloto antes mencionado, consiste en la formulación de 5,000 bbl/día de gasolina extra con 5 % de etanol anhidro, para atender la demanda de gasolina de la ciudad de Guayaquil, lo cual implica la producción de alrededor de 40,000 litros diarios de alcohol. Con los resultados de este proyecto, se ampliará la cobertura a nivel nacional.

En una segunda fase, se ha previsto realizar otro proyecto piloto, en la ciudad de Quito, denominado “Uso de Biodiesel en la Formulación de Diesel 2”, orientado a satisfacer las necesidades del parque automotor.

Existe en el Ecuador la voluntad política y un marco legal para sostener, impulsar, favorecer la producción de “bio”combustibles. La Constitución Política de 1998, en su

³³ Rostros nuevos con viejas máscaras Agrocombustibles: ¿Transición hacia una sociedad pospetrolera o reciclaje imperialista?

³⁴ IICA, Op.Cit.

artículo 89 dispone que “el Estado tomará las medidas orientadas a promover en el sector público y privado el uso de tecnologías limpias y de energías alternativas no contaminantes”.

Uno de los impactos más notorios de las plantaciones de palma es la extensiva e intensiva deforestación de la zona, como un requisito para la ampliación de los cultivos de palma, pues las plantaciones se están estableciendo en zonas de bosques naturales. Las empresas palmicultoras hacen doble negocio: talan el bosque, venden la madera y siembran la palma. Esta producción ha generado la destrucción de bosques tropicales para plantar la palma, lo que ha significado una amenaza seria para la población Awá y las comunidades afroecuatorianas.

En el Norte de Esmeraldas, zona otrora ocupada por bosque húmedos tropicales han convivido de manera pacífica desde hace cientos de años poblaciones indígenas (Awá y Chachi) y afrodescendientes. Su territorio forma parte del llamado “Chocó biogeográfico” caracterizado por bosque de altísima biodiversidad y pluviosidad.

La consecuencia más generalizada de la expansión de los cultivos de palma es la profundización de la pobreza en zona, quienes al perder sus tierras, se están quedando sin los cultivos que les garantizan su supervivencia. Esta situación genera una sociedad más desigual, coloca a los pobladores en condición de mayor vulnerabilidad y va en contra de los principios democráticos más elementales.

Para la FENOCIN los agrocombustibles, une a la aseveración de que esto afecta la seguridad del mundo, por que la alimentación es un derecho humano, y nosotros como campesinos e indígenas, tenemos el derecho decidir que es lo que queremos producir y consumir, y esa es el verdadera Soberanía Alimentaria.

d) Hidroeléctricas

La Región Andina se caracteriza por su alta dependencia de la energía hidroeléctrica: Venezuela y Ecuador cuentan con más del 60 por ciento aproximadamente de generación mediante plantas hidroeléctricas, mientras que Colombia las utiliza en casi un 80 por ciento.³⁵

Las interconexiones entre algunos de estos mercados ya existen y se encuentran operando. El proceso de integración inicia con la “Decisión 536” de la CAN. Debido a su ubicación geográfica, Colombia es el país con mayor cantidad de interconexiones internacionales en la región andina. Colombia y Ecuador cuentan con dos líneas de interconexión que permiten procesos de importación y de exportación de energía. Colombia además tiene tres líneas que le interconectan con Venezuela y se encuentra en negociaciones para formar parte de la integración energética centroamericana mediante la interconexión con Panamá. Ecuador posee una interconexión con Perú de la que se beneficia en épocas de

³⁵ Power Engineering, “Integración Región Andina”, Marzo 2004, http://pepei.pennnet.com/display_article/249933/70/ARTCL/none/none/1/Integraci%C3%B3n-Regi%C3%B3n-Andina/ (descargado 21/ 05/ 08)

estiaje. Otros mercados, como Venezuela, Bolivia o el propio Perú cuentan o planean contar con interconexiones con países fuera de la región Andina. Así, Venezuela está interconectada con el norte de Brasil, Perú con Chile, y Bolivia con Argentina y Brasil.

Para la Región Andina el proyecto IIRSA tiene previsto la elaboración de estudios de Integración energética y la implantación de líneas de transferencia eléctrica además de la construcción de plantas hidroeléctricas. Entre los proyectos hidroeléctricos cuentan la Central hidroeléctrica Ponce en Colombia y la Central hidroeléctrica Caruachi en Venezuela que se encuentra en ejecución.

Colombia actualmente posee 31 hidroeléctricas que pueden responder a la demanda eléctrica nacional hasta el 2010. Porce III tiene el objetivo de cubrir el déficit para esas fechas. Porce III ubicado en Antioquia será la cuarta generadora del país, con una generación de 660 MW y una inversión aproximada de 920 millones de dólares. 864 hectareas de tierra serán inundadas.

Este proyecto implica, según cálculos de ONGs, una afectación directa a 494 familias y 650 mineros de aluvión, es decir, 2.689 personas³⁶. Además habrá impactos debido a la presión migratoria y los impactos ambientales como: alteración del cauce y caudales río abajo, retención de sedimentos, procesos de erosión, alteración y destrucción de flora y fauna terrestre y acuática.

Al referirse a la carretera Panamericana en el Tapón del Darien y, Porce III, una de las organizaciones sociales de Colombia, la Red juvenil, afirma : “Ambos proyectos hacen parte del IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Latinoamericana) y el Plan Puebla Panamá Bogotá, o mejor dicho la cara inversionista de las empresas extranjeras a través de los préstamos hechos por el BID, para asegurar el funcionamiento del Tratado de Libre Comercio, que aunque sin “firmar” opera con la agudización de las causas del conflicto, desde hace algunos años en Colombia”.³⁷

³⁶ Gómez Ochoa, Gloria Luz; El Colombiano: “Porce III, Energía para el futuro”; [http://www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/E/energia para el futuro/energia para el futuro.asp](http://www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/E/energia_para_el_futuro/energia_para_el_futuro.asp) (descargado 23/ 05/08)

³⁷ Red Juvenil; “Los préstamos internacionales a cambio del agua”; <http://www2.redjuvenil.org/content/view/343/46/>

3. MERCOSUR

3.1 Antecedentes de la integración energética en el Mercosur.

El contexto de integración energética en el Mercosur ha sido sistemáticamente alentado desde principios de la década de los noventa, en el marco de las reformas neoliberales que tendieron a liberalizar y desregular los mercados energéticos como mecanismo para garantizar el acceso del capital internacional a los yacimientos y reservas en la región.

La suscripción de la agenda energética marcada por la Iniciativa de las Américas en 1990, abrió paso para un lento pero sostenido proceso de interconexión de las infraestructuras petrolíferas y gasíferas existentes en la subregión. El avance más significativo en este sentido – y el que abre paso a las iniciativas de integración plena – es el que se alcanza en el Memorandum del 10 de diciembre de 1999, en donde se acuerdan los procedimientos para la interconexión relativa a los gasoductos de la región.

A partir del 2005, la agenda de integración energética en la subregión ha estado circunscrita, cada vez más, a los avances registrados en los proyectos establecidos dentro de los ejes de integración que forman parte de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA); y otros proyectos de integración contemplados en torno a la interconexión de ductos y yacimientos gasíferos en la región y otros países de Sudamérica.

Dada la heterogeneidad que existe entre los niveles de desarrollo y regulación de la política energética en los países que conforman el MERCOSUR, los proyectos de integración se han ido desarrollando a veces en confrontación unos con otros. Sin embargo, el estado de avance de las iniciativas de integración petrolera y gasífera registradas en esta subregión, son comparativamente mayores a las registradas en otros bloques latinoamericanos.

3.2 Proyectos y conflictos socioambientales

a) Hidrocarburos

La presencia de Petrobrás en Bolivia.

La orientación de las inversiones de Petrobrás en Bolivia suceden en el marco de una política estratégica brasileña ligada a la exploración y producción de reservas de gas para garantizar el abastecimiento del gasoducto Brasil – Bolivia, concluido en 1998. Sin embargo, el área de petróleo representa una significativa porción de la inversión de Petrobrás, sobre todo en lo que corresponde a las Refinerías Gualberto Villaroel (Santa Cruz) y Guillermo Elder (Cochabamba), adjudicadas a Petrobrás en asocio con la empresa argentina Perez Companc, desde noviembre de 1999. Sobre la base de esta concesión se conformó la Empresa Boliviana de Refinación EBR, que provee de lubricantes y carburantes básicos a todo el territorio nacional, además de exportar a los mercados peruano y chileno. La empresa, tiene *concesiones en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Beni y La Paz, totalizando 5 bloques (San Alberto y San Antonio en Tarija; Bloque Río Hondo, ubicado en La Paz, Beni y Cochabamba; Ingre y Monteagudo en Chuquisaca, y desde agosto de 2003 el bloque petrolero “Irenda”*).³⁸

Uno de los mejores ejemplos de la conflictividad sociambiental provocada por la presencia de la estatal brasileña en territorio boliviano lo constituye el caso de el llamado *Bloque Río Hondo*. El Bloque Río Hondo fue adjudicado mediante licitación pública en el 2001. Sin embargo, nueve años antes, un decreto ejecutivo creó en el mismo espacio territorial, la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pílon Lajas, reconociendo la necesidad de protección ambiental de este ecosistema y procurando garantizar el derecho al territorio a los pueblos indígenas.

La concesión del bloque, contraría lo establecido en el decreto, adjudicando más de un millón de hectáreas a Petrobrás Bolivia. Se prevé perforar 2.520 pozos de 15 metros de profundidad, se utilizarán 16 Kg. de explosivos por pozo, en total 40,32 Toneladas. Se habilitarán 21 helipuertos con una superficie de 900 m² cada uno, 280 zonas de descarga, 21 campamentos volantes, un campamento-base de 4 ha cerca de la comunidad ElPalmar, de donde se abastecerá de agua al campamento.

³⁸ Leroy Jean Pierre y Malerba Julianna comp, *Petrobrás ¿integración o explotación?*, Fase/ Proyecto Brasil Sustentable e Democrático, 2005

La Reserva tiene, además, la condición de Tierra Comunitaria de Origen, territorio habitado por pueblos tsimanes, mosetenes y tacanas. De acuerdo al Consejo Regional Tsiman Moseten, el proyecto de Sísmica Río Hondo Sur jamás fue consultado con las comunidades como lo establece la Ley de Medio Ambiente.

b) Gasoductos

El Cono Sur posee dos de las más grandes reservas probadas de gas en la región: Bolivia con el 12% y Argentina con el 8%. Además las reservas probadas son significativas en Brasil (5%). Este último país, anunció recientemente el descubrimiento de un importante yacimiento de gas asociado en la Cuenca de Santos al sudeste de Brasil. Cerca de 14.400 millones de barriles de reservas de crudo y gas equivalente fueron hallados por la empresa Petrobrás. El Cono Sur es la subregión que más avances registra en lo referente a la interconexión gasífera a través de una red de gasoductos binacionales construidos en su mayoría: *“Entre las décadas de 1960 y de 1990, las exportaciones de Bolivia a Argentina fueron los únicos casos de intercambio en base al gas. La expansión de la generación térmica con gas natural dio lugar a una ampliación en el comercio regional de gas natural, con Bolivia y Argentina como exportadores. Entre 1996 y 2002 se construyen 7 gasoductos Argentina - Chile, Gasoducto Bolivia - Brasil (3150 km), Gasoducto Argentina - Brasil y Gasoducto Argentina – Uruguay”*³⁹

Mediante la firma de varios acuerdos entre naciones y algunos protocolos de entendimiento en el tema energético al interior del Mercosur, se viabilizó la construcción de la red de gasoductos que enlistamos en la tabla 1.1.

³⁹ Rudnick, Hugh, Abastecimiento de gas natural, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007. Consulta en línea: <http://www2.ing.puc.cl/~power/alumno07/gas/objetos/Abastecimiento%20de%20Gas%20Natural.pdf> (descargado 25/ 05/08)

TABLA 1.1 CONSTRUCCIÓN DE RED DE GASEODUCTOS

Países	Ubicación	Capacidad (MMm3/D)	Situación
Argentina Chile	San Sebastián (Arg) - Punta Arenas (Cl) (Barrundía)	4/2	En operación
Argentina Chile	Batería de Recepción 7 Tierra del Fuego	1,5	En operación
Argentina Chile	Pta. Dungeness (Arg)- Cabo Negro (Cl) (Dungeness)	2	En operación
Argentina Chile	El Cóndor (Arg) - Posesión(Cl)	2	En operación
Argentina Chile	L. La Lata (Arg) – Concepción (Cl) (Gas Pacífico)	3,5	En operación
Argentina Chile	La Mora (Arg) – Santiago(Cl) (GasAndes)	10	En operación
Argentina Chile	Crnl. Cornejo (Arg) – Mejillones (Cl) (GasAtacama)	9	En operación
Argentina Chile	Gasod. Norte (Arg) – Tocopilla (Cl) (NorAndino)	8,5	En operación
Argentina Bolivia	Ramos (Arg) – Bermejo (Bol)	1,5	En operación
Argentina Bolivia	Campo Durán (Arg) – Madrejones (Bol)	7	En operación
Bolivia Paraguay	Vuelta Grande (Bol) – Asunción (Py)	–	En estudio
Argentina Paraguay	Crnl. Cornejo (Arg) – C del Este (Py)	–	En estudio
Argentina Brasil	Crnl. Cornejo (Arg) – Sao Paulo (Bra)	–	En Proyecto
Argentina Brasil	Aldea Brasilera (Ar) – Uruguayana (Bra) -	10	En operación
	Ampliación Uruguayana(Br) – Porto Alegre		En proyecto
Argentina Uruguay	Gto. Entrerriano (Arg) – Paysandú (Uy) (Del Litoral)	1	En operación
Argentina Uruguay	Gto. Entrerriano (Arg) – Casa Blanca (Uy)	5-2	En operación
Argentina Uruguay	Buenos Aires (Arg) – Montevideo (Uy) – (Cruz del Sur)	6	En operación
Uruguay Brasil	Colonia (Uy) – Porto	-	En proyecto

	Alegre (Bra)		
Bolivia Brasil	Río Grande (Bo) – Sao Paulo (Bra)	30	En operación
Bolivia Brasil	San Miguel (Bo) – Cuiaba (Bra)	2,8	En operación

Fuente: Kart Peter Shütt, Flavio Caruzzi coord, "El factor energético y las perspectivas de integración en América del Sur, ILDIS, Caracas, 2008 pag 72

El Anillo Energético del Cono Sur.

El Anillo Energético es un proyecto de interconexión gasífera impulsado fundamentalmente por Chile, para suplir su déficit energético provocado por la disminución de las reservas Argentinas. Este proyecto de interconexión gasífera plantea acceder a parte de los recursos existentes en el yacimiento de Camisea en Perú, y así aumentar la disponibilidad de este recurso en los países del Cono Sur. El proyecto consta de dos fases: la primera aprovecharía las interconexiones gasíferas ya existentes en la región, sobre todo entre Chile y Argentina, y conectarlas a través de un gasoducto de unos 1200 kilómetros de extensión desde la ciudad de Pisco en Perú, hasta la ciudad chilena de Tocopilla. La primera propuesta de interconexión gasífera continental se denomina "Gran Anillo del Gas" anunciada en junio de 2005 por los Países del MERCOSUR después de una serie de cambios políticos en Bolivia.

El gasoducto Bolivia-Brasil.

El gasoducto Bolivia-Brasil fue construido pensando en el abastecimiento de los sectores industriales de Brasil. Es operado por la empresa Transportadora Brasileira Gasoducto Bolivia-Brasil S/A - TBG, este gasoducto tiene 2593 Km. de extensión en el territorio brasileño y 557 Km en Bolivia.

El gasoducto atraviesa una zona de especial sensibilidad ecológica, el ecosistema perteneciente al Pantanal del Bosque Seco Chiquitano. Si bien la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil fue promovida como una obra con un manejo ambientalmente responsable por los organismos multilaterales que auspiciaban la obra – Banco Mundial y la CAF -, los problemas, infracciones y denuncias en Bolivia, durante la fase de construcción y posterior a ella, empezaron con el inicio de la obra sin haber obtenido la licencia ambiental.

Se sucedieron con los impactos en territorios indígenas y áreas protegidas de los delicados ecosistemas de Bolivia, la falta de información y accesibilidad a documentos, como el estudio de evaluación de impacto ambiental y planes conexos, la ausencia o inoportuna

consulta a los pueblos afectados a lo largo del gasoducto, y una serie de transgresiones en la etapa de construcción. A eso se suma la debilidad en la capacidad institucional del gobierno de Bolivia para la fiscalización y el monitoreo de los impactos de largo plazo.

En la actualidad, particularmente en la región del Pantanal, donde los equilibrios de ecosistemas dependen de los delicados flujos hídricos superficiales y subsuperficiales interrumpidos por el gasoducto, que actúa como una especie de dique de redistribución, secando lagunas y curiches, con el consiguiente efecto a las pequeñas poblaciones, cuya vida estaba estrechamente relacionada con estos cuerpos de agua.

Los proyectos incluyen el Polo Gas Químico binacional, la Fábrica de Urea del Oriente, la Siderurgia EBX en Bolivia, el Polo Siderúrgico en Corumbá, la Minería de Hierro y producción de hierro reducido en Mutún, en asociación con el Polo Siderúrgico de Corumbá, y el Proyecto Ferroportuario Motacusito Puerto Busch, para el transporte de hierro, atravesando el Parque Otuquis, que protege el Pantanal boliviano.

c) Agrocombustibles

Sin duda Brasil es el referente para América Latina –y el mundo- en materia de agrocombustibles, particularmente para el etanol a partir de caña de azúcar. En 1975, en plena crisis petrolera, creó el Programa Nacional de Alcohol (Proálcool) con un fuerte apoyo para inversiones en destilerías y obligando a utilizar un porcentaje mínimo de mezcla con la gasolina. Ha sido por varios años el primer productor mundial, y actualmente es el segundo, después de Estados Unidos; permanece como primer exportador mundial.

Brasil explota menos de un tercio de su área agrícola, la cual constituye la mayor frontera para la expansión agrícola del mundo. Su potencial es de cerca de 150 millones de hectáreas, de las cuales 90 millones son de nuevas fronteras y las otras 60 son de tierras dedicadas a pastos, que podrían incorporarse a la frontera agrícola en el corto plazo.⁴⁰

La empresa brasileña PETROBRAS está lentamente cambiando su perfil de empresa petrolera a empresa de energía, y en esa tarea otorga cada vez más atención a los agrocombustibles. En la actualidad, esa empresa con el apoyo del gobierno de Lula ha logrado

⁴⁰ Gerardo Honty y Eduardo Gudynas. AGROCOMBUSTIBLES Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, en Observatorio del desarrollo, mayo 2007.

acuerdos específicos de promoción de agrocombustibles con varios países de la región, y está en las etapas iniciales de expandir sus exportaciones bajo acuerdos con empresas en Japón y la Unión Europea. Las grandes empresas del sector agrícola también están incorporando estos negocios, y en especial aquellas que manejan el comercio de la caña de azúcar y la soja (por ejemplo Cargill, Dreyfus y Bunge & Born).

En países con marcada tendencia a la apertura de mercados energéticos, como Argentina y Brasil, el objetivo último de la producción en agrocombustibles es el abastecimiento de los mercados europeos y norteamericano, quienes demandan energéticos alternativos para responder a la obligación de reducción de emisiones de carbono en el marco del Protocolo de Kyoto.

El gran propulsor del etanol brasileño es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), brazo financiero del gobierno para inversiones en infraestructura y cooperación. El impulso que se genera desde este Banco es de 5 980 millones de dólares es el valor de los numerosos proyectos de producción de agrocombustibles en la cartera del BNDES, de los cuales casi la totalidad se refiere al bioetanol.

El BNDES brinda apoyo tanto para la etapa industrial, a través de la inversión en usinas de alcohol, como en la de plantaciones de caña de azúcar. El director del Área Social y de Crédito, Elvio Gaspar, declaró abiertamente que no hay limitación de recursos en el banco para el apoyo a la producción de biocombustibles⁴¹.

El BID tiene solamente tres proyectos específicos en la industria de agrocombustibles en Brasil que sumarían préstamos por un valor de 570 millones de dólares: la reestructuración del debito de la fábrica Moema, en Sao Paulo, con miras a aumentar su capacidad de producción y exportación de azúcar y alcohol, además de dos mas en Minas Gerais y Mato Grosso do Sul, lo que significa nuevas áreas, y no necesariamente áreas de producción “verde” u orgánica, como sugiere la palabra.

En torno a estos proyectos energéticos organizaciones como Vía Campesina, indígenas, y movimientos sociales, GT Biodiesel de la CUT Brasil (incluye MDST, MPA, Contag, FETRAF y MAB) y el Programa Cono Sur Sustentable, advierten que el desarrollo de esta industria representa una violación a la soberanía alimentaria, al convertir territorios

⁴¹ Visca, Paola. El combustible de los agrocombustibles: El BNDE. Observatorio del Desarrollo, 2007.

que alimentan y acogen a las comunidades, en tierras concentradas por grandes industrias agrícolas para la plantación de monocultivos, cuyo destino final (como biodiesel) son las poblaciones urbanas y principalmente, las ciudades de los países del Norte. Adicionalmente, esta producción es sindicada responsable de la destrucción de territorios y migración de comunidades; contaminación y daños a la salud por uso de plaguicidas; difusión de cultivos transgénicos; pobreza y deterioro de las condiciones de vida de las comunidades campesinas e indígenas.⁴²

Diferentes organizaciones ciudadanas han criticado al BNDES, tanto por el tipo de proyectos que financia, como por la forma en que se incorporan aspectos sociales y ambientales en las decisiones. Si bien el BNDES afirma que solo libera fondos para quienes cumplan con la ley ambiental, existen dudas sobre si tales garantías son suficientes. Por ejemplo, según Alexandre Raslan, perteneciente al Ministerio Público Estadual, la cuestión ambiental está siendo tratada en base a la improvisación.⁴³

d) Hidroeléctricas

Brasil y Paraguay son los países que más han aprovechado de la construcción de centrales y Paraguay es el único país exportador de excedentes hidroeléctricos en la región. Es la principal riqueza natural en explotación en el Paraguay. Gracias básicamente a los aprovechamientos binacionales del Río Paraná: Itaipú, Corpus Christi y Yacyretá. En el Brasil, el Proyecto Río Madeira forma parte del eje IIRSA: Perú-Brasil- Bolivia. Ubicado en la Amazonía se ubica el proyecto del Complejo río Madeira. El Madeira es uno de los 5 ríos mas caudalosos de la región. La parte andina (Bolivia) de la cuenca del Alto Madeira posee una gran diversidad climática y algunos de los niveles más altos de biodiversidad del mundo. Entre el Alto y Bajo Madeira, caracterizado por su alto potencial para la navegación y construcción de presas, hay un tramo de pequeñas cascadas, zonas de endemismo y alta biodiversidad.⁴⁴

El Complejo Hidroeléctrico del río Madeira constituirá, si se hace realidad, en el proyecto hidroenergético más grande de la Amazonía. Embalsará, además, el segundo río más caudaloso de la cuenca, inferior solamente al mismo río Amazonas. Por sus características y origen andino, el río Madera se diferencia mucho del resto de los grandes afluentes del

⁴² AA.VV. Política Energética en América Latina: Presente y Futuro, Chile, 2008.

⁴³ Visca, Paola. Op.Cit.

⁴⁴ Proyecto del centro de información bancaria; Megaproyecto: conjunto de subproyectos rio Madeira” ; <http://www.biceca.org/es/Project.Overview.138.aspx#EstudiosDeImpacto> (descargado 25/ 05/08)

Amazonas. Transporta la mitad de los sedimentos de la cuenca y drena una de las regiones de mayor diversidad física y biológica del mundo, que es compartida entre tres países: Bolivia, Brasil y Perú. Los estudios de impacto ambiental de las dos represas del Complejo situadas en territorio brasileño, identificaron impactos de muy alta magnitud que afectarían a los peces, la fauna y flora, la población, los sedimentos y la propagación de enfermedades tropicales.

Uno de los mayores riesgos constituye el desbordamiento de la presa, pues los estudios han demostrado que cuando las represas empiecen a funcionar se llenarían de sedimentos desbordándose hacia la selva de Bolivia.

El retener estos sedimentos tras los muros de la presa despojaría el río, corriente abajo, de los valiosos nutrientes que hoy fertilizan las tierras agrícolas y contribuyen al sustento de gran biodiversidad del Río Madeira (hay hasta 750 especies de peces y 800 especies de aves). Además hay un efecto potencial sobre las especies migratorias de peces⁴⁵.

Yacyreta es un emprendimiento compartido entre Paraguay y Argentina, forma parte del eje Mercosur- Chile. Aunque se pone en funcionamiento desde el 94, su obra se encuentra inconclusa hasta la actualidad. Funcionando a cota 76 ya ha ocasionado daños en ambos márgenes. En lo social, se han desararticulado los barrios y asentamientos previamente existentes, provocando ruptura de lazos comunitarios y destruyendo el tejido social en la zona, así como la alteración de las actividades económicas locales. En la actualidad, se han relocalizado en la margen Argentina 5725 familias y en la margen paraguaya se han relocalizado 2366 familias. En el plan de Terminación de Yaciretá se tiene previsto relocalizar a 4361 familias en Paraguay y 1500 familias en Argentina.⁴⁶

Corpus Christi se construiría entre las represas de Yaciretá e Itaipú, acabando con el último trecho natural del Alto Paraná. Con lo que se represaría de manera definitiva la mayoría del caudal del Río, provocando serios impactos ambientales y sociales a la región. Podemos mencionar impactos en la fauna ictica, flora costera, calidad del agua, además de afectaciones sociales a la economía y comunidades ribereña.

La nueva represa encajonaría a los peces entre Itaipú, Corpus y Yacyretá, fenómeno que provocaría su extinción definitiva debido a que se interrumpen las migraciones y

⁴⁵ Molina Carpio, Jorge; "Análisis de impacto ambiental del Complejo Río Madeira"; Abril de 2006. www.fobomade.org.bo/rio_madera/doc/analisis_madera.pdf (descargado 27/ 05/08)

⁴⁶ Proyecto del centro de información bancaria (BICECA); "Terminación del complejo hidroeléctrico binacional yacireta"; <http://www.biceca.org/es/Project.Overview.412.aspx> (descargado 23/ 05/08)

reproducciones de reproductivo dorados, surubíes, bagres, pacúes, manduvíes y carnívoros de mayor tamaño, que además se alimentan de los huevos y larvas de los sábalos que constituyen la base de esta gran red alimentaria. Además, la construcción de la represas está asociada al riesgo de incrementar los ingentes niveles de deforestación. Se sabe que la superficie que originalmente cubría de selva Paranaense a Misiones eran 2.700.000 has. y en la actualidad solo quedan aproximadamente 1.200.000 has. de bosque nativo, de las cuales 450.000 has. corresponden a áreas protegidas, hoy en día las cifras de deforestación que llegan a las 4 has/día, unas 12.000has anuales. Esto conlleva a un deterioro de la calidad de vida de los habitantes, principalmente de los sectores más vulnerables de la sociedad.⁴⁷

⁴⁷ Rios Vivos; “Basta de grandes represas en el rio Paraná” ; <http://www.taller.org.ar/Megaproyectos/Represas/expedicion/corpus.htm> (descargado 23/ 05/08)

Conclusiones y Recomendaciones

Las iniciativas de integración energética entre los países de América Latina se enmarcan dentro de las tendencias y contratendencias que determinan de modo general el actual panorama de la integración regional en otros aspectos. La cada vez más acuciante dependencia de la economía norteamericana de yacimientos y reservas petroleras extranjeras, supone una presión tendencialmente creciente sobre las reservas y yacimientos de petróleo y gas existentes en la región. Latinoamérica posee el 9,7% del total de reservas petroleras en el mundo (de ellas el 40% son reservas no explotadas), mientras que en el caso del gas, nuevos hallazgos de yacimientos en Brasil, Venezuela y Bolivia incrementan substancialmente las ya significativas reservas gasíferas del subcontinente.

Bajo el modelo neoliberal hegemónico durante los últimos 25 años, el centro de las preocupaciones en las inversiones y proyectos de integración energética fueron cada vez menos aquellos dirigidos a suplir las demandas de las poblaciones, o a lograr la autosuficiencia energética, y cada vez más a promover un atractivo marco de *energybusiness* para las empresas extranjeras. Incluso empresas estatales que no habían sido enteramente privatizadas, como el caso de Petrobrás, entran en sintonía con las orientaciones emanadas del mercado mundial a través de modelos de gestión altamente empresarial que suponen el abandono de una cierta racionalidad pública – manejo y cuidado de los recursos encomendados como bienes de la sociedad toda, creación y gestión de la riqueza en función de la satisfacción de necesidades sociales antes que privadas, etc. -, al tiempo que subvencionan el esquema de crecimiento y financiamiento macroeconómico por la vía del incremento acelerado de las exportaciones, sobre todo de *commodities* y materias primas.

A partir del desgaste propio de las políticas neoliberales se registra una tendencia a la construcción de relaciones económicas y políticas sustentadas en la multipolaridad, la cual se manifiesta en nuevas orientaciones de algunos gobiernos latinoamericanos, que comienzan a buscar caminos heterodoxos para la integración subregional, antes que una interacción de tipo hemisférico subordinada a la política de los Estados Unidos. Es decir, una vuelta a “lo latinoamericano” como opción preferente frente a “lo pan-americano”. Estas nuevas propuestas retoman el papel protagónico de los estados, tanto en la regulación de los mercados energéticos - sobre todo en la política frente a los recursos no renovables – como en las decisiones formuladas alrededor de los diferentes proyectos de integración. En países como Bolivia, Venezuela y Ecuador se rediscuten estrategias en torno a la nacionalización de los hidrocarburos, mientras

Argentina y Brasil se esfuerzan por robustecer a las empresas estatales para que cumplan un rol destacado en el abastecimiento de sus propios países.

Sin embargo, estos importantes esfuerzos de integración no subordinada no están exentos de la generación de conflictos al interior de las sociedades latinoamericanas. Este es el caso de los conflictos de tipo socioambiental que están desatándose a raíz de la puesta en marcha de una serie de proyectos de integración energética.

Algunas reflexiones en torno a los conflictos socioambientales suscitados por la integración latinoamericana.

Finalmente, pretendemos esbozar en este apartado algunas reflexiones en torno a las características que presentan el grueso de los conflictos socioambientales señalados a lo largo de este trabajo. Nos proponemos, a partir de este ejercicio, abonar el terreno para una discusión más profunda sobre aquello que podríamos llamar una *tipologización de los conflictos socioambientales*.

En estas breves líneas finales, no pretendemos de ningún modo establecer de manera definitiva o a modo de conclusión, una pauta metodológica o teórica para ello. Simplemente intentamos dar cuenta de modo general de las principales problemáticas que dan origen a la conflictividad, así como las lógicas de desarrollo de los mismos y las distintas modalidades que estos pueden presentar.

Ateniéndonos al carácter exploratorio y siempre provisional de esta tipología, presentamos tres posibles modos de clasificar los conflictos enunciados.

Conflictos en torno al uso y control del territorio.

El territorio es un espacio físico y social que expresa materialmente las relaciones sociales que establecen los seres humanos con fines productivos y reproductivos. El territorio se concibe como un conjunto indisociable de objetos y sistemas de acciones. Los sistemas de objetos son cada vez más artificiales provocados por sistemas de acciones igualmente imbuidas de artificialidad, y cada vez más tendientes a fines extraños al lugar y a sus habitantes.⁴⁸ En ese sentido, el territorio es mucho más que el telón de fondo en el que se

⁴⁸ Miltón Santos, citado en Espacio, territorio y Región: Conceptos Básicos para un Proyecto Nacional, Montañez Gómez Gustavo y Delgado Mahecha Ovidio, Cuadernos de Geografía, Universidad Nacional de Bogotá, N 12, 1998.

desarrollan las relaciones sociales, pues es en sí mismo un producto social constituido a partir de las dinámicas de apropiación, uso y control de los recursos y bienes naturales, que se enmarcan dentro de unos determinados modos de fabricar y aprehender la riqueza.

La territorialidad por su parte, sería la capacidad efectiva por parte de un grupo o estamento de la sociedad para disponer del territorio y ordenarlo – material y simbólicamente – de acuerdo a sus finalidades sociales. Las relaciones sociales que moldean este territorio de acuerdo a determinados fines se convierten en relaciones hegemónicas que subordinan y/o anulan territorialidades previamente existentes o posibles de desarrollarse en torno al territorio.

En este sentido, muchos de los conflictos socioambientales en torno a la integración energética reflejan la presencia de territorialidades en disputa al interior de los espacios sociales escogidos para la realización de los proyectos de integración. Se trata en este caso de conflictos que suponen la colisión de dos o más lógicas distintas para el uso, control y disposición de los recursos y bienes existentes en el territorio. La conflictividad bien pudo haber existido de forma latente o manifiesta con anterioridad al proyecto, o en determinadas ocasiones pudo originarse por entero debido a los dramáticos cambios que un nuevo sistema de objetos supone para las relaciones sociales dentro del territorio.

Para el primer caso, es ilustrativa la conflictividad que se desarrolla entre los pueblos indígenas, en particular los de las distintas amazonías, y los proyectos hidrocarburíferos y gasíferos de integración. En estos casos, la conflictividad social se encuentra latente en la medida en que se asienta sobre la matriz de un conflicto originario: la disímil relación existente entre el uso y representación del territorio que hacen los pueblos indígenas amazónicos y la que hace del mismo el Estado Nación⁴⁹. Este puede ser claramente el ejemplo de la intensa conflictividad existente en la amazonía sur del Ecuador en torno a la expansión de la frontera petrolera propuesta por el Estado nación y las compañías petrolíferas transnacionales, y los pueblos de las nacionalidades shuar, achuar, kichwas y shiwiar que consideran la penetración de compañías petroleras como un atropello lesivo a sus modos de vida y dignidad colectiva, al tiempo que reclaman al Estado el respeto a su morada y lugares sagrados.⁵⁰

⁴⁹ A fin de abundar sobre esta problemática véase, Díaz Polanco Héctor,

⁵⁰ El caso emblema es el de la Comunidad de Sarayacu contra la petrolera Burlington Resources en la Provincia de Pastaza en Ecuador.

Para el caso de los conflictos derivados de la integración energética latinoamericana, la disputa entre el Consejo de Gobierno de los Pueblos Tsisman Mosete y la intervención de Petrobras en sus tierras comunitarias ubicadas dentro del Bloque Hondo, bien puede dar cuenta de la problemática generada en torno a la disparidad de usos y disposiciones del territorios, agravadas por la ausencia de reconocimiento de la autoridad de pueblos indígenas sobre sus tierras comunitarias.

Para el segundo caso, los conflictos se centran generalmente en torno a la disputa por el uso y disposición de un recurso natural o un bien ambiental concreto, o por la construcción de una red de infraestructura que comporta una alteración en el marco de relaciones sociales y relaciones ecológicas existentes.

En este caso, si bien existe un código cultural y una manera de normar el territorio compartida – es decir un pleno desarrollo de la territorialidad hegemónica – el conflicto se activa en torno al posible desequilibrio que comportaría el uso y disposición de un recurso o bien ambiental existente en el territorio para finalidades energéticas. El ejemplo más adecuado para este caso, serían los conflictos registrados entre las comunidades campesinas del Salvador y el proyecto de Megapresa “El Tigre” que disputan en concreto el uso del agua y la tierra en donde se asentaría la represa.

Una importante variante de este tipo de conflictos por el uso y disposición del territorio es aquel que se desarrolla en el plano de relaciones de fuerza globales, entre redes transnacionalizadas de ambientalistas y ecologistas y los proyectos energéticos que intervienen en zonas prioritarias para la conservación tales como la Amazonía meridional, la Gran Sabana Venezolana, el Ecosistema del Chocó, entre otros. La particularidad de estos conflictos reside en que, si bien eventualmente pueden incluir alianzas con poblaciones residentes en las zonas de conservación, son conflictos articulados en torno a preocupaciones y agendas globales tales como el cambio climático, la conservación de grandes ecosistemas y sus remanentes, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, etc.

El centro de estas preocupaciones gira en torno a la reducción de los espacios ecológicos en beneficio del crecimiento de los espacios económicos altamente monopolizados por capitales y corporaciones transnacionales.

Conflictos socioambientales que agravan condiciones de inequidad social.

Un segundo tipo de conflictividad, es aquella que se deriva de un tipo específico de conflictos que articulan una doble dimensión: conflictos ambientales y conflictos en torno a la redistribución de la riqueza.

Nos referimos esencialmente a conflictos que implican a poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad social, asentadas sobre graves condiciones de inequidad social y que enfrentan conflictos redistributivos con sus respectivos Estados. En este contexto, los conflictos de tipo redistributivo se incrementan significativamente en torno a la presencia de grandes capitales y movimientos de dinero en la región, vinculados a la construcción de la infraestructura necesaria para los proyectos hidrocarburíferos, gasíferos, de agrocombustibles, etc.

En otros casos, como el de los agrocombustibles en Colombia y Brasil, los proyectos trastocan el balance de fuerzas entre sectores sociales en el campo, favoreciendo fenómenos de concentración de la tierra que redundan en una mayor conflictividad social.

Una de las posibles derivas de este tipo de conflictos, es que la mirada ambiental en torno al uso de recursos y afectaciones socioambientales, se solape bajo un mirada que pone énfasis en el plano redistributivo, bien sea a través de las denuncias de las condiciones socioeconómicas que atraviesan las poblaciones de las áreas afectadas, o a través de la negociación- exigencia de compensaciones e indemnizaciones y demás medidas que permitan paliar en algo las agravadas condiciones de pobreza.

En el límite, muchos de estos conflictos involucran escalas nacionales que convierten a los recursos naturales en emblemas reivindicativos de una política de soberanía y negociación de mejores condiciones de articulación para los países dentro de la globalización. Este es el caso de la llamada Guerra del Gas en Bolivia

Conflictos socioambientales en torno a la inobservancia de normas y reglamentos ambientales nacionales.

Son conflictos estructurados en torno a la escasa capacidad de los Estados nacionales para controlar efectivamente los flujos globales de inversión de capital en el área energética. La inobservancia de leyes y reglamentos ambientales, da cuenta de una subordinación de las

prioridades de protección ambiental a las estrategias económicas de países sustentados en torno a la explotación intensiva de recursos naturales para el mercado energético mundial.

En los conflictos ambientales ha sido recurrente el problema de la represión a los opositores de los proyectos de integración por parte de la fuerza pública y muchas veces guardias privados al servicio de las empresas. A esta situación se suma el rol de funcionarios que para resolver los problemas antes que dialogar y conocer los puntos de vista de los afectados intentan desautorizar a los opositores a los proyectos y dividir así a las comunidades agredidas.

A continuación detallamos algunas conclusiones y recomendaciones respecto a cada uno de los ámbitos de conflictividad presentados en el Informe.

Conclusiones relativas a los proyectos de integración hidrocarburífera:

- La conflictividad derivada de los proyectos de integración energética latinoamericana a partir de los hidrocarburos se encuentra estrechamente vinculada a las asimetrías estructurales que existen entre los países, bloques y regiones económicas de América. La integración energética en hidrocarburos privilegia las inversiones para explotación de nuevos campos y yacimientos, al tiempo que alienta la construcción de infraestructura de interconexión (gasoductos, poliductos, oleoductos, etc.) entre países, sin evaluar necesariamente las implicaciones referentes al agotamiento de reservas, los riesgos para el autoabastecimiento nacional y la intensidad de los impactos sobre los ecosistemas frágiles como el caso de la Amazonía.
- La imperiosa dependencia de los combustibles fósiles de la región relativiza los marcos de control ambiental y el cumplimiento de los derechos colectivos para las poblaciones indígenas en los países del sur, debido al anclaje extractivista que muestran las economías de los países fundados en los *comodities*.

Recomendaciones relativas a los proyectos de integración hidrocarburífera:

- La saturación de la conflictividad socioambiental presente en los procesos de integración energética, requiere la orientación de políticas públicas destinadas a introducir cambios en la matriz energética latinoamericana. Se requiere superar el nivel de dependencia de combustibles fósiles, introduciendo alternativas de abastecimiento energético preferentemente sobre la base de energías limpias y

modelos de abastecimiento energético que sean sustentables y manejen una escala territorial que no suponga alteraciones o transformaciones violentas de los ecosistemas y poblaciones.

- Una de las problemáticas más agudas en torno a los conflictos socioambientales por hidrocarburos, es la diferencia registrada en torno a los distintos marcos jurídicos de protección ambiental que varían en alcance y efectividad de país a país. La ausencia de una normativa regional sobre este tema es correlativa a la ambigüedad en la que permanecen la mayoría de procesos de integración – definidos a partir de diferentes herramientas, diferentes instituciones, convenios, acuerdos, etc -. Se precisa por tanto, definir, en primer término, lo que ha de entenderse - jurídica y políticamente - por integración regional energética de acuerdo a las especificidades de cada bloque de integración. En segundo término, se deben acoplar los distintos avances en legislación ambiental en cada país a fin de construir una normativa ambiental de carácter regional.
- La legislación ambiental deberá ser acoplada en un sentido de avance progresivo, es decir, incorporando las normativas más avanzadas en materia de derechos y principios de protección. Es sumamente importante ratificar los avances en materia de derechos indígenas – que constan en las declaraciones de Naciones Unidas sobre este tema – y universalizar el derecho de consulta previa a las poblaciones asentadas en los territorios donde se desarrollarán proyectos que puedan afectar ostensiblemente al ambiente y provocar transformaciones sociales significativas.

Conclusiones relativas a los proyectos de integración basados en energía eléctrica.

Respecto a los proyectos de interconexión energética relacionados con la producción y distribución de electricidad cuyo origen son las empresas hidroeléctricas, podemos concluir que los principales impactos socioambientales por su implementación son los siguientes:

- Desplazamiento de comunidades para la construcción de las represas y las plantas hidroeléctricas
- Desviación de ríos y consecuente pérdida de acceso para las comunidades circundantes
- Pérdida de vestigios arqueológicos por el removimiento de masas de tierra para la construcción de las represas.
- Deforestación para establecer el tendido eléctrico

- Procesos de erosión del suelo y pérdida de la biodiversidad debido a la edificación de las obras de infraestructura
- Inconformidad por parte de las comunidades afectadas por falta de consulta previa
- Desencadenamiento de procesos de resistencia contra la construcción de represas e hidroeléctricas; resistencias que paulatinamente sobrepasan su ámbito local, para transformarse en espacios de resistencia de carácter regional, como lo evidencia el caso de las comunidades organizadas del Sureste de México y Centroamérica.

Recomendaciones respecto a los proyectos de integración de energía eléctrica:

- Todo proyecto de interconexión eléctrica debería estar plenamente justificado no sólo económica, sino socialmente. Es decir, tendría que ser acompañado de estudios socioeconómicos que demuestren la necesidad *social* de su implementación. Se recomienda que en la elaboración de tales proyectos se incorpore la participación de organismos de la sociedad civil de todos aquéllos países involucrados en tales empresas. Los estudios de impacto ambiental relativos a los proyectos deberían estar encargados, de igual manera, a organizaciones de probado carácter independiente de los países participantes;
- Todos los proyectos hidroeléctricos deberían ser ampliamente difundidos entre la población en general y particularmente entre aquéllas comunidades o poblaciones que se verían afectados de alguna manera por tales proyectos; esto supone la socialización de la información sobre los beneficios esperados, pero también sobre las potenciales consecuencias de carácter socioambiental;
- La difusión debería estar acompañada del consentimiento expreso de las comunidades para el desarrollo de los proyectos
- En el supuesto de que las comunidades estuvieran de acuerdo en la realización de los mismos, deberían tomarse las medidas adecuadas para mitigar los impactos socioambientales al mínimo, lo cual implica la gestión colectiva de los riesgos y potenciales conflictos.
- En el caso de aquéllos proyectos que ya hayan desencadenado protestas sociales se recomienda el establecimiento inmediato de mesas de diálogo con las poblaciones afectadas para establecer mecanismos transparentes y eficaces para la resolución de los conflictos. De ser necesario, se debería proceder a la restauración de los ecosistemas afectados y a la reparación de daños a las poblaciones afectadas.

Conclusiones respecto a agrocombustibles:

Hay dos factores externos que están presionando para el desarrollo acelerado del mercado de los agrocombustibles en América latina: el agotamiento del petróleo (o al menos la llegada a su cenit) y la amenaza del cambio climático. Este impulso está encabezado por los países industrializados que tienen los dos problemas: son los que están obligados por el Protocolo de Kioto a reducir las emisiones de efecto invernadero y son quienes tienen el mayor consumo de petróleo, un combustible que será cada día más caro. Como la disponibilidad de tierra en estos países es insuficiente para abastecer todo su consumo, la oportunidad –junto con el problema– se traslada a los países en vías de desarrollo.

La intensidad de los efectos (positivos o negativos) de la bioenergía sobre la soberanía alimentaria y el medio ambiente dependerá de la escala y velocidad de cambio; del tipo de sistema productivo que se considere; de la estructura de los mercados de productos y energía; y de las decisiones en materia de políticas agrícolas, energéticas, ambientales y comerciales.

Un efecto que se está comenzando a sentir es el impacto del mercado de los agrocombustibles en los precios de los alimentos y otros productos agrícolas. Esto está siendo influido, no sólo por la competencia por la cantidad de tierra dedicada al cultivo de uno u otro producto, sino por el impacto indirecto del aumento de los precios de la tierra, de los precios de los fertilizantes e insumos agropecuarios y del aumento de los precios internacionales de los mismos granos, que pueden tener usos alimentarios o energéticos, como el maíz, la soja o la caña de azúcar.

Este es un problema complejo para los países latinoamericanos. En una economía globalizada como la actual, puede ser muy difícil para un país tomar decisiones para dirigir el destino del uso de la tierra o asegurar precios accesibles para los alimentos. Si hay una demanda internacional importante de agrocombustibles que presione los precios de los granos al alza, va a ser complicado para un gobierno evitar las inversiones extranjeras, o que los grandes propietarios criollos no se orienten a estos cultivos de exportación. Esto puede limitar la producción de alimentos para consumo interno y puede conducir a un alza general de los precios internacionales de los productos alimentarios que impida el acceso a ellos por parte de la población de menores recursos económicos.

Recomendaciones respecto a agrocombustibles

- Es necesario crear una política regional que implique que los agrocombustibles no pueden amenazar la Soberanía Alimentaria de los pueblos.
- Los agrocombustibles no deben cultivarse en países con gran agrobiodiversidad, debido al enorme impacto que tendrán sobre la pérdida de cultivos tradicionales para alimentación.
- Los programas de agrocombustibles deberían estar subordinados a políticas agrarias que eviten fenómenos de desabastecimiento agroalimentario y reconcentraciones sobre la propiedad de la tierra. Para ello, es deseable que los programas de agrocombustibles no alienten los monocultivos, sino que se fundamenten en programas de cultivo consensuados con los pequeños y medianos agricultores, tendientes a desarrollarse como uno más de los cultivos.

Bibliografía

AAVV, “Carta abierta a los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela”, 03/06. Consulta en línea: <http://amigransa.blogia.com>

AA.VV. Política Energética en América Latina: Presente y Futuro, Chile, 2008.

Amin, Samir, El capitalismo en la era de la globalización, Paidós, Barcelona, 1998.

Bermúdez, Rosa Megaproyectos de infraestructura y agrocombustibles en el Pacífico Colombiano. En “Agrocombustibles: Llenando tanques, vaciando territorios” Censat Agua Viva y PCN, Bogotá, 2008.

Bravo, Elizabeth, Biocombustibles, cultivos energéticos y soberanía alimentaria en América Latina. Quito-Ecuador.

----- Rostros nuevos con viejas máscaras Agrocombustibles: ¿Transición hacia una sociedad pospetrolera o reciclaje imperialista?

CEPAL, Perspectivas de un Programa de Biocombustibles en América Central. México, 2004.

Coviello, M.F. Energías renovables en América Latina y el Caribe: dos años después de la Conferencia de Boon. CEPAL y GTZ, Santiago de Chile. 2006.

Del Solar, Carlos, “Perú LNG” (presentación Power Point), 06/09/06. Consulta en línea: <http://www.olade.org.ec/fier/Documents/PDF-18.pdf>

Fontaine, Guillaume, “Verde y negro: ecologismo y conflictos por petroleras en el Ecuador”, en Fontaine, Guillaume, Greert Van Vliet y Richard Pasqui (coord.), *Políticas ambientales y gobernabilidad en América Latina*, FLACSO-IDDRI-CIRAD, Quito, 2007,

Gudynas, Eduardo, “La dimensión ambiental de la integración física y energética en el Cono Sur”, CLAES, Montevideo, nd.

Guzmán, Oscar, “El factor energético en la integración de la Unión de Naciones Suramericanas”, en en Schutt, Kurt Meter y Flavio Carucci (Coord.), *El Factor energético y las perspectivas de integración en América del Sur*, ILDIS, 2008, p. 73

Honty, Gerardo y Eduardo Gudynas. AGROCOMBUSTIBLES Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, en Observatorio del desarrollo, mayo 2007.

Honty Ceuta, Gerardo, Impactos Ambientales del Sector Energético en el Mercosur. Diagnóstico y Perspectivas, COSSEM, Montevideo, noviembre del 2001.

IICA, Atlas de la agroenergía y los biocombustibles en las Américas.

Ivonne Rincón, “El gasoducto destruirá la Amazonía y la Guayana venezolana”, El Correo del Caroní, 17/04/07. Consulta en línea:

<http://www.correodelcaroni.com/content/view/63454/139/>

Ivonne Rincón, “Ambientalistas exigen suspensión del proyecto de gasoducto”, El Correo del Caroní, 09/03/06. Consulta en línea:
<http://www.correodelcaroni.com/content/view/24906/139/>
Kart, Peter Shütt, Flavio Caruzzi coord, ”El factor energético y las perspectivas de integración en América del Sur, ILDIS, Caracas, 2008

Kelly, Hearn, “World largest pipeline proposed to run through Amazon”, en National Geographic News, 04/01/07. Consulta en línea:
<http://news.nationalgeographic.com/news/2007/01/070104-gas-pipeline.html>

Leroy Jean Pierre y Malerba Julianna (comp.), Fase/ Proyecto Brasil Sustentable e Democrático, 2005.

López, Víctor, *Conflictos socioambientales. Desafíos y propuestas para la gestión en América Latina*, Abya Yala, Quito, 2000

Márquez, Humberto, “El supergasoducto es caro y polémico”, IPS, 22/02/06. Consulta en línea: <http://www.tierramerica.net/2006/0225/noticias3.shtml>

Osava, Mario, “Lluvia de críticas a supergasoducto en Brasil”, Tierramérica, Río de Janeiro, 29/05/07. Consulta en línea:
<http://www.tierramerica.info/sendnota.php?lang=esp&idnews=315>

Paéz, Angel, “Derechos indígenas violados por gasoducto en Camisea”, IPS, 01/03/06. En: <http://www.olca.cl/oca/peru/camisea02.htm>

PIEM, “¿Qué beneficios traerá el PIEM?”, en: http://www.amedes.org.mx/publicaciones/2006_FORO_BIREGIONAL_Programa%20de%20Integraci%20n%20Energ%20tica%20Mesoamericana_SENER%20M%20E9xico.ppt

PDVSA, Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos, Avances de la Nueva PDVSA, 14/10/07. Consulta en línea:
<http://www.pdvs.com/interface.sp/database/fichero/publicacion/2287/130.PDF>

PDVSA, “Petroamérica”, en <http://www.pdvs.com>

Ruiz Caro, Ariela, “Cooperación e integración energética en América Latina y el Caribe”, Naciones Unidas, Santiago de Chile abril 2006.

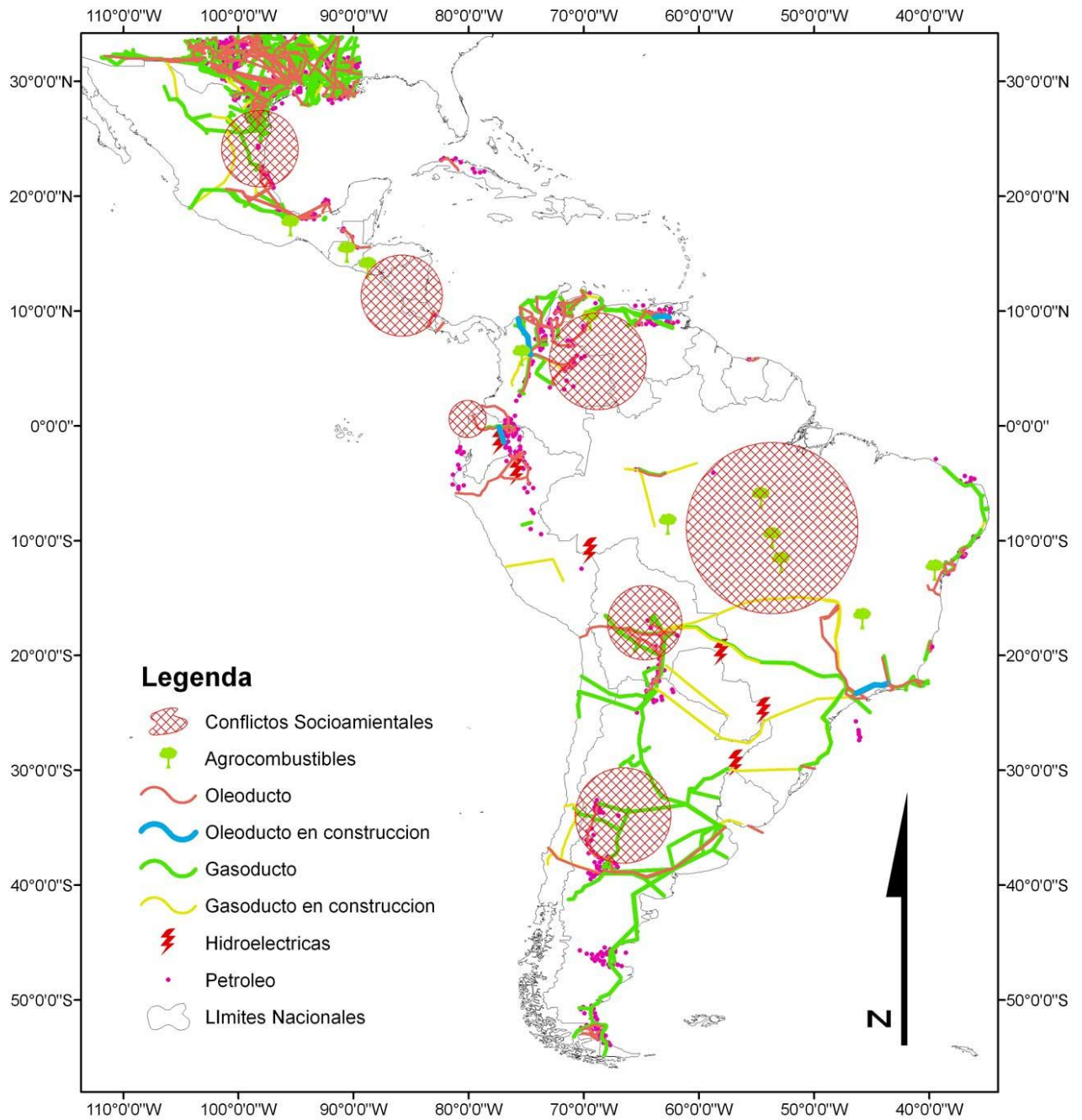
Secretaría Coordinadora, “Iniciativa Energética Hemisférica: avances retos y estrategias”, V Reunión de Hemisférica de Ministros de Energía, marzo 2001.

Torres, Víctor Hugo, *Aprendiendo de los conflictos. Experiencias metodológicas de manejo de conflictos socioambientales en Ecuador*, PLASA, Futuro Latinoamericano, Quito, 2005,

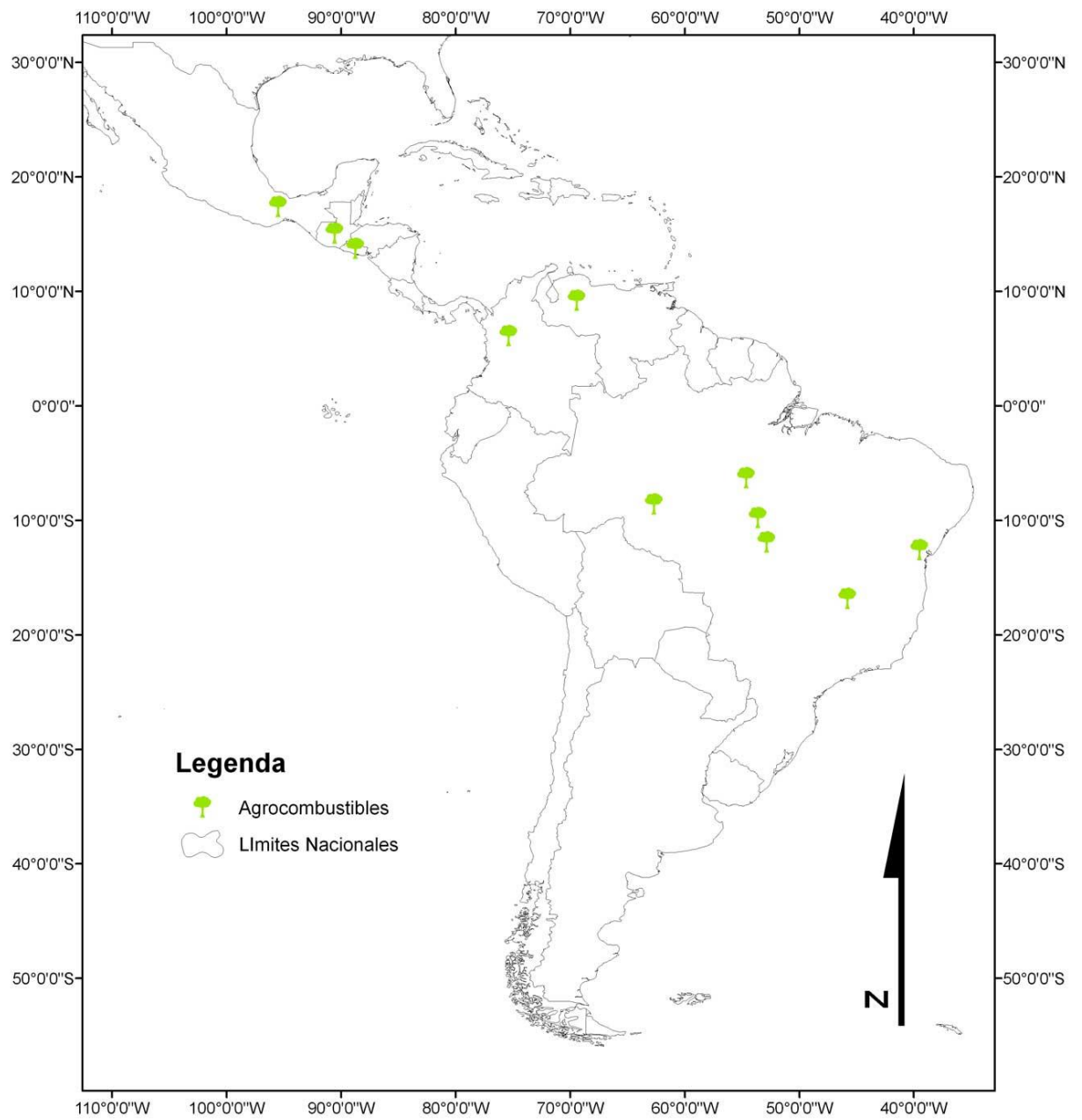
Visca, Paola. El combustible de los agrocombustibles: El BNDE. Observatorio del Desarrollo, 2007.

ANEXOS:

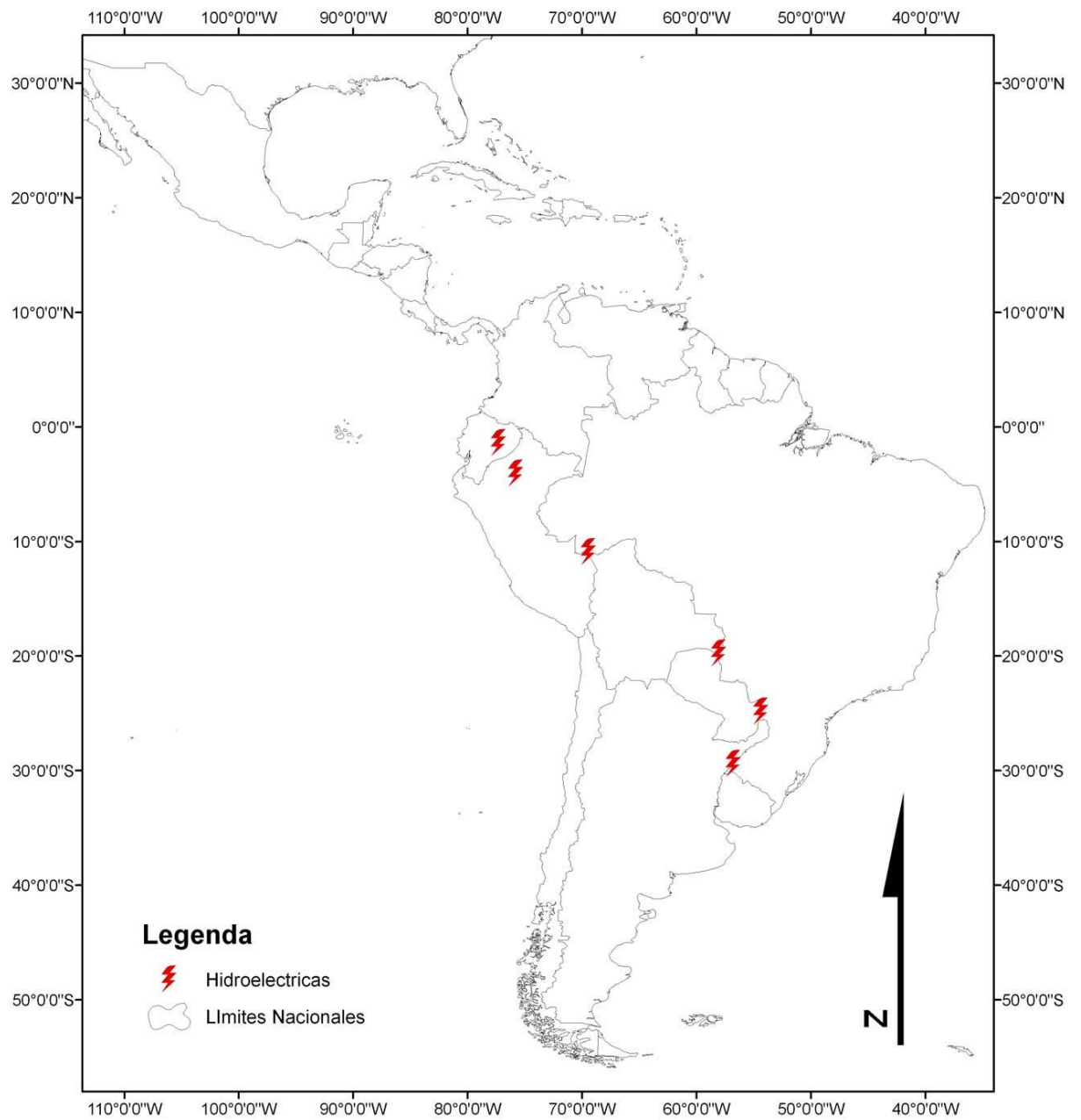
A) Integración Energética en América Latina



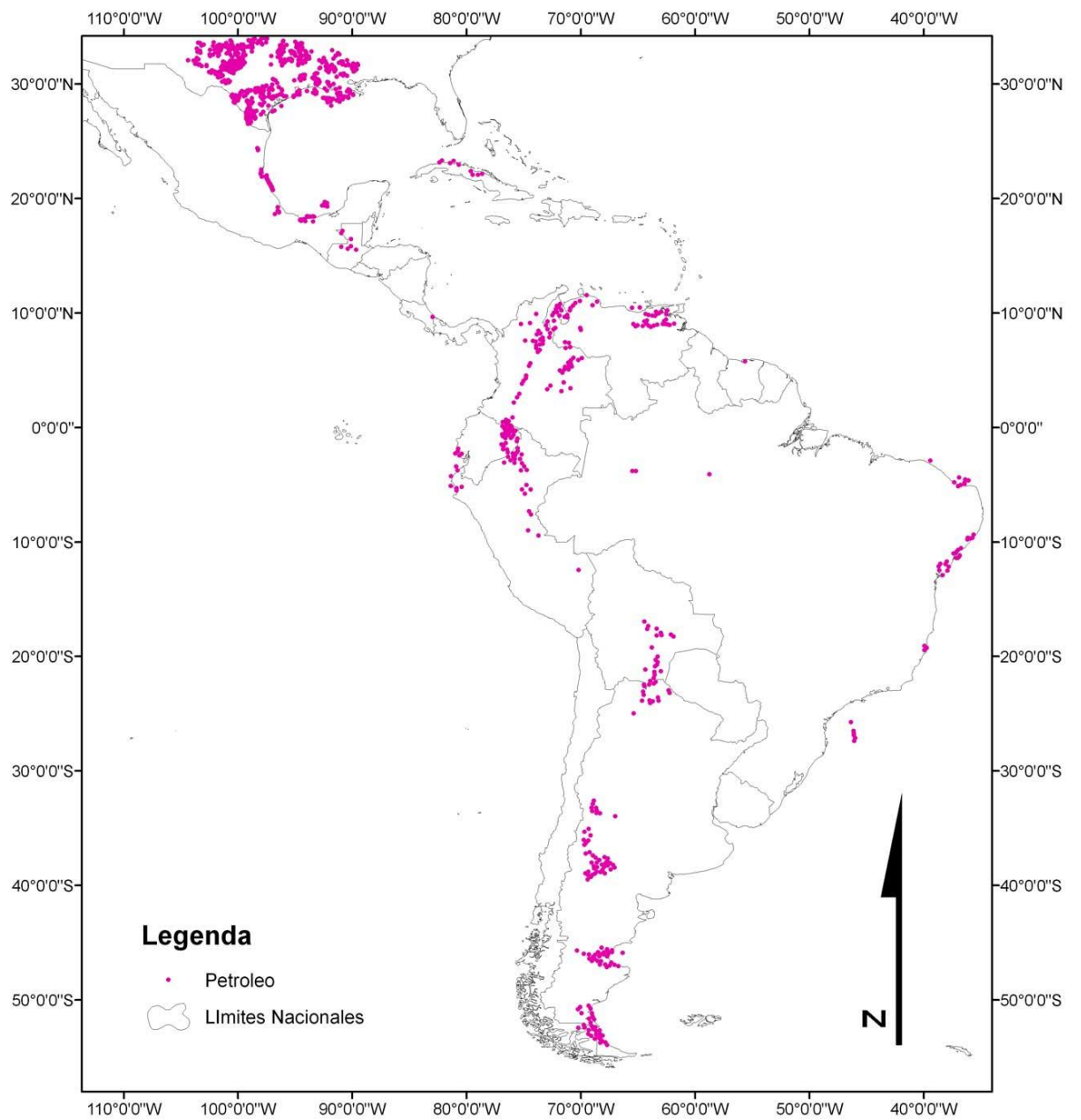
B) Agrocombustibles:



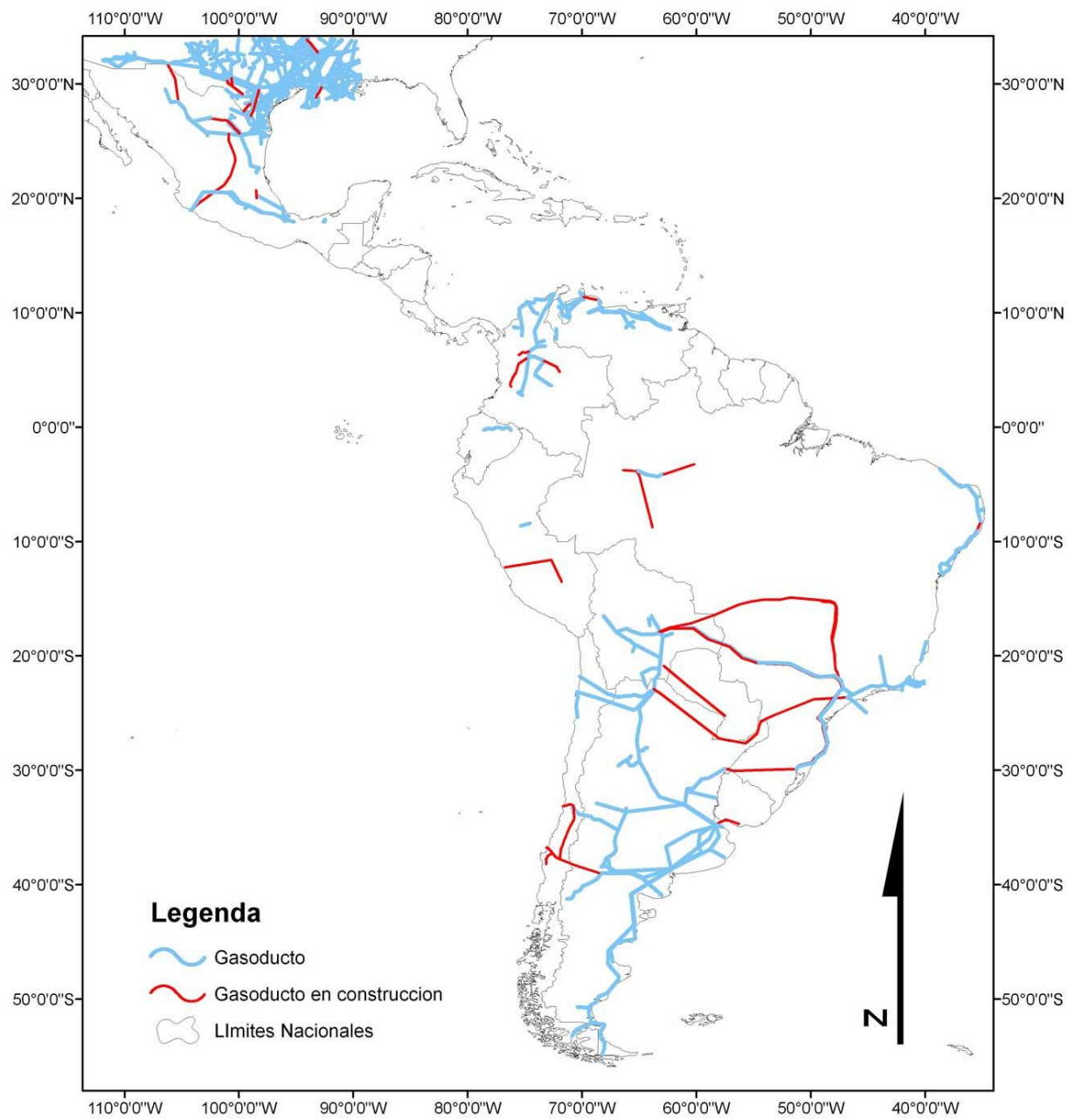
C) Hidroeléctricas



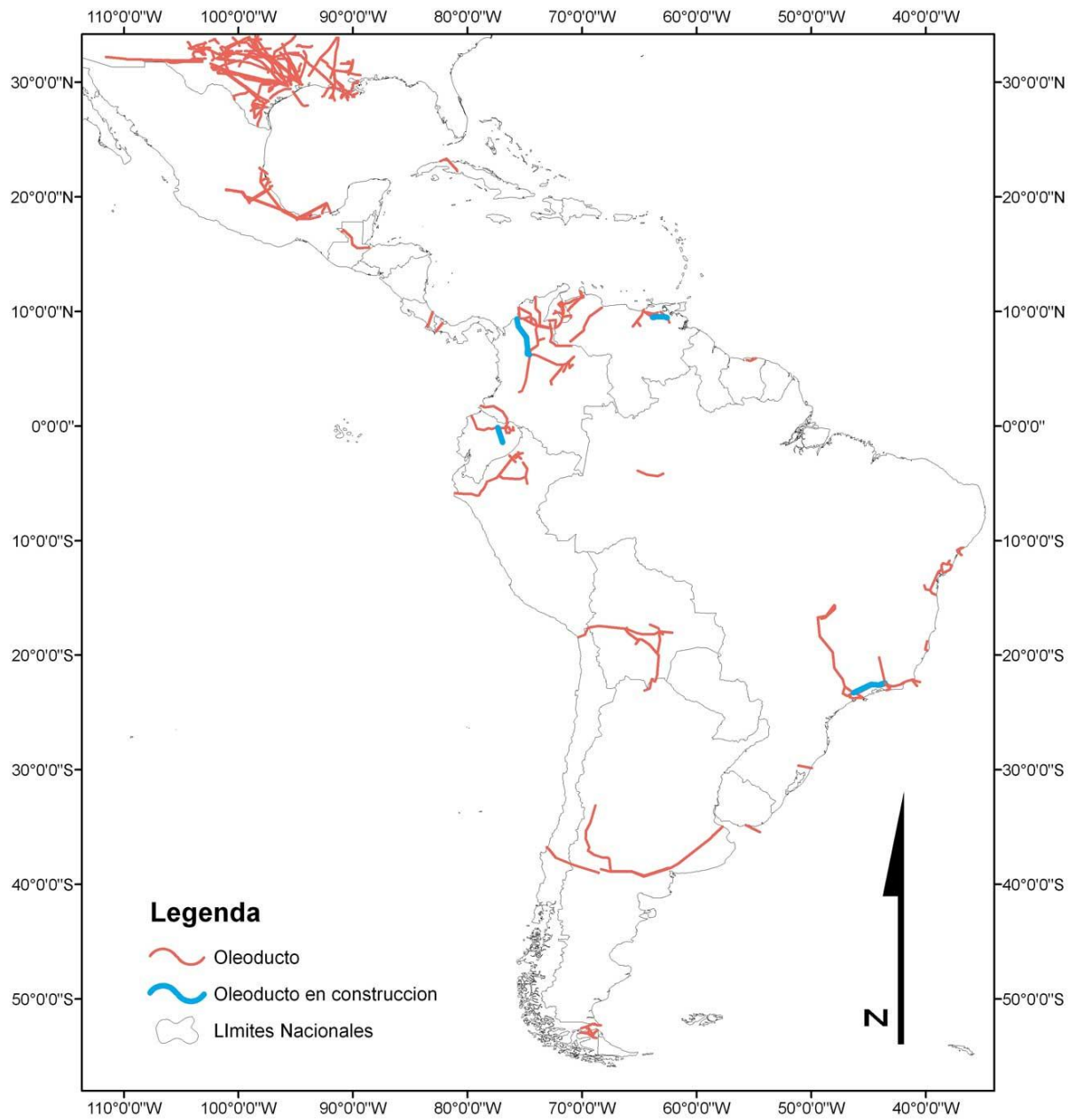
D) Yacimientos Petr leo:



E) Gasoductos



F) Oleoductos:



G) Conflictos Socioambientales

